

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



**“ANÁLISIS DEL DELITO DE LESIONES LEVES POR DAÑO
PSÍQUICO MODERADO EN RELACIÓN CON EL DELITO DE
INJURIA”**

PRESENTADA POR: Br. JUAN MANUEL ACEVEDO LESCANO

ASESORADO POR: Mg. ANDRÉS ERNESTO VILLALTA PULACHE

TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ABOGADO

PIURA – PERÚ

2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

**“ANÁLISIS DEL DELITO DE LESIONES LEVES POR DAÑO
PSÍQUICO MODERADO EN RELACIÓN CON EL DELITO DE
INJURIA”**

TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE ABOGADO



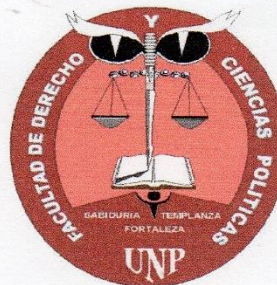
Mg. ANDRÉS ERNESTO VILLALTA PULACHE
ASESOR



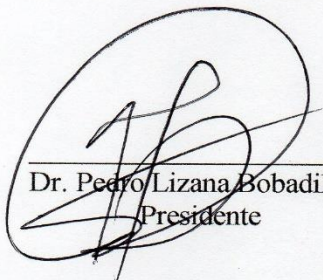
Br. JUAN MANUEL ACEVEDO LESCANO
TESISTA

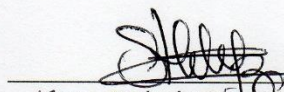
PIURA – PERÚ
2017

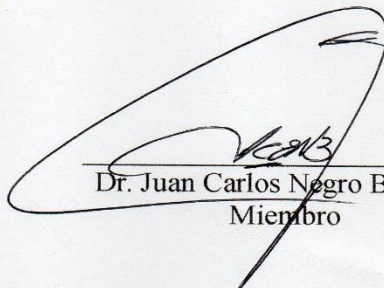
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



**“ANÁLISIS DEL DELITO DE LESIONES LEVES POR DAÑO
PSÍQUICO MODERADO EN RELACIÓN CON EL DELITO DE
INJURIA”**


Dr. Pedro Lizana Bobadilla
Presidente


Abog. Esthely Rosa Bayona Castro
Miembro


Dr. Juan Carlos Negro Balarezo
Miembro



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
DECANATO



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

ACTA DE SUSTENTACIÓN POR TESIS

Los miembros del Jurado Calificador que suscriben, reunidos a las 05:00 p.m. del día Sábado 04 de noviembre de 2017 en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, para evaluar la Tesis titulada "ANÁLISIS DEL DELITO DE LESIONES LEVES POR DAÑO PSÍQUICO MODERADO EN RELACIÓN CON EL DELITO DE INJURIA" presentada por el Tesista: ACEVEDO LESCANO, JUAN MANUEL, habiendo sido asesorado por el Doctor: Andrés Villalta Pulache; oídas las observaciones y respuestas a las preguntas formuladas y de conformidad al Reglamento de Tesis para la obtención del Título Profesional, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, lo declaran:

APROBADO (X)

DESAPROBADO ()

El dictamen y calificaciones podrán ser, según Reglamento de Tesis:

Excelente

Sobresaliente

0

Notable

Bueno

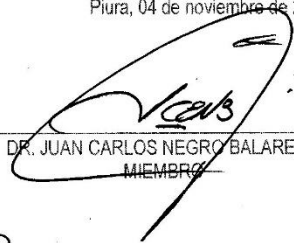
Con la mención de:

NOTABLE

- () En consecuencia, queda en condición de ser ratificado por Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título de Abogado.
- () En consecuencia, queda en condición de ser ratificado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título de Abogado, después de que el sustentante incorpore las sugerencias del Jurado Calificador.

Piura, 04 de noviembre de 2017


DR. PEDRO LIZANA ROBADILLA
PRESIDENTE


DR. JUAN CARLOS NEGRO BALAREZO
MIEMBRO


ABOG. ESTHEL Y BAYONA CASTRO
MIEMBRO

DEDICATORIA

*A mi hija por ser el pilar
fundamental en mi vida.*

AGRADECIMIENTO

*A mis padres por hacer posible mi
formación, en esta noble profesión.*

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	VIII
AGRADECIMIENTO	IX
ÍNDICE GENERAL	X
GLOSARIO	XIV
LISTA DE ABREVIATURAS	XVI
RESUMEN ESTRUCTURADO	XVII
ABSTRACT.....	XVIII
INTRODUCCIÓN	15
CAPÍTULO I	17
MARCO TEÓRICO	17
1.1. DELITO DE LESIONES	17
1.1.1. Tipificación del Delito de Lesiones.....	17
1.1.2. Bien Jurídico Protegido	21
1.1.3. Delito de Lesiones en Legislación Comparada	21
1.1.4. Valorización del Delito de Lesiones.....	23
1.1.4.1. Incapacidad médico legal.....	23
1.1.4.2. Criterios de Valorización de Lesiones Físicas y Psíquicas	24
1.2. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	29
1.2.1. Definición	29
1.2.2. Tipos de Violencia Contra la Mujer	31
1.2.2.1. Violencia Física.....	31
1.2.2.2. Violencia Psicológica.....	32
1.2.2.3. Violencia Sexual	33
1.2.2.4. Violencia Económica o Patrimonial	34
1.2.3. La Salud Mental de las Personas	35
1.2.4. La experiencia de violencia	37
1.3. El DAÑO.....	38
1.3.1. Definición	38
1.3.2 Clasificación del Daño	39

1.3.2.1. Daño Emergente	41
1.3.2.2. Lucro Cesante	41
1.3.2.3. Daño Moral:	41
1.3.2.4. Daño Psicológico	42
1.3.2.5. Daño Físico	44
1.3.2.6. Daño Social	45
1.3.2.7. Daño al Proyecto de Vida	46
1.4. DELITOS CONTRA EL HONOR	46
1.4.1. Bien Jurídico Tutelado	47
1.4.1.1. Posición Fáctica	48
1.4.1.2. Posiciones Normativas	49
1.4.1.3. Posición adoptada (normativa- funcional)	50
1.4.1.4. El Honor Subjetivo	52
1.4.1.5. El Honor Objetivo	52
1.5. EL DELITO DE INJURIA	53
1.5.1. Definición	53
1.5.2. Tipicidad objetiva	54
1.5.2.1. Modalidad Típica	54
1.5.2.2. Sujeto Activo	57
1.5.2.3. Sujeto pasivo	58
1.5.3. La Veracidad de la Frase Injuriosa	59
1.5.4. Formas de Imperfecta Ejecución	60
1.5.5. Tipo Subjetivo del Injusto	61
1.5.6.- Causas de Justificación	62
1.5.7. Errores relacionados a la calificación del hecho concreto	63
1.6. MARCO NORMATIVO	64
1.6.1. Marco normativo internacional	64
1.6.2. Marco Normativo Nacional	67
1.6.2.1. Ley 30364	68
CAPÍTULO II	74
DISEÑO METODOLÓGICO	74

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	74
2.1.1 Enunciado del Problema	74
2.1.2 Formulación del Problema	75
2.1.3. Justificación del Problema.....	76
2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	76
2.2.1. Objetivo General:	77
2.2.2. Objetivos Específicos:	77
2.3. HIPÓTESIS GENERAL	77
2.4. VARIABLES	77
2.4.1. Conceptualización de las Variables:.....	78
2.4.2. Operacionalización de las Variables	79
2.4.2.1. Indicadores	79
2.5. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN	81
2.5.1. Tipo de Investigación	81
2.5.2. Modelo de la Investigación	81
2.5.3. Diseño de la Investigación.....	82
2.5.4. Métodos de la Investigación.....	82
2.5.5. Técnicas de la Investigación.....	83
2.5.6. Fuentes de Investigación	83
CAPÍTULO III.....	84
PROBANZA DE LA HIPÓTESIS	84
3.1. ANÁLISIS Y CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS Y LOS OBJETIVOS	84
a) Determinar si es necesario delimitar los delitos de lesiones por daño psíquico moderado con el delito de injuria.	84
b) Determinar si los verbos rectores del daño psicológico como “humillar”, “insultar” va referido al honor de una persona.	87
c) Evidenciar los reales alcances del delito de lesiones leves por daño psíquico.	88
CONCLUSIONES	93
RECOMENDACIONES	95
ANEXO	97
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	97

PRESUPUESTO	98
GASTOS PRESUPUESTADOS	98
MATRIZ DE CONSISTENCIA	99
BIBLIOGRAFÍA	101
LINKOGRAFÍA	102

GLOSARIO

- **Derecho Penal:** Ciencia que estudia el conjunto de normas jurídicas que definen determinadas conductas como infracciones (delitos o faltas) y dispone la aplicación de sanciones (penas y medidas de seguridad) a quienes lo cometen.
- **Delito:** El delito es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley.
- **Violencia contra la Mujer:** Cualquier acción o conducta que, basada en su condición de género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado.
- **Violencia Psicológica:** Conducta pasiva o activa practicada en descrédito, deshonra o menosprecio al valor de la dignidad personal de la mujer o el hombre, de igual forma los maltratos, negligencias, humillaciones, amenazas y comparaciones destructivas que puedan afectar la autoestima de la persona y que perjudique su desarrollo operativo, lo que puede generar depresión o incluso el suicidio
- **Lesiones Leves:** Las lesiones leves son las que causan una enfermedad o una incapacidad, que duren de 10 días a 30 días.
- **Injuria:** La Injuria consiste en lesionar, a través de una acción, o de una expresión, la dignidad de una persona perjudicando su reputación, o atentando contra su propia estima, al imputarle un hecho o cualidad en menoscabo de su fama o autoestima.

- **Derecho al Honor:** El derecho al honor protege la reputación y fama de una persona, su prestigio profesional o su dignidad personal.

- **Humillación:** Del latín humiliatio, es la acción y efecto de humillar o humillarse (herir el amor propio o la dignidad, abatir el orgullo), es decir; es la ofensa que alguien o algo causa en el orgullo o el honor de una persona.

- **Pericia Psicológica:** Es el análisis del comportamiento humano en el ámbito de la ley y del derecho.

- **Daño psíquico:** La afectación y/o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo.

- **Daño moral:** Aquel menoscabo que recae sobre cosas no susceptibles de apreciación sensorial. Produce entonces una afección a los caracteres inherentes del individuo que forman parte de su fuero interno, como las emociones y los sentimientos, que si bien no son tangibles, forman parte de la personalidad del individuo.

LISTA DE ABREVIATURAS

Art.	: Artículo
CPP	: Código Procesal Penal
CP	: Código Penal
Cit	: Cita
Exp.	: Expediente
ed.	: Edición
p.	: Página
Vol.	: Volumen

RESUMEN ESTRUCTURADO

La presente investigación consistió en realizar un análisis interno y externo del artículo 122° del Código Penal, y se tiene como objetivo demostrar si es necesario realizar una delimitación entre el delito de lesiones leves por daño psíquico moderado y el delito de injuria. Dicho ello es evidente que la información obtenida y existente nos lleva a concluir que los verbos rectores que producen el daño psíquico no son suficientes, dado que carece de un requisito que en nuestra opinión es indispensable, el cual es la habitualidad.

Finalmente, después de hacer revisión doctrinaria se ha llegado a la conclusión que la técnica legislativa empleada por el legislador, no ha sido la correcta, dado que se aprecia que solo las humillaciones, insultos, ofensas, no son causantes de daños psíquicos, sin embargo si estos sucesos, son reiterativos, habituales y causen un daño no momentáneo como depresión, inseguridad, trastornos de la alimentación, trastornos de ansiedad o alteraciones del sueño entre otros podrían configurar como un tipo de lesión y con las pericias correspondientes se determinaría la existencia de una afectación psíquica.

PALABRAS CLAVE:

Violencia psicológica, daño psíquico, daño psicológico, delito de injuria, honor.

ABSTRACT

The present investigation consists of conducting an internal and external analysis of Article 122 of the Penal Code, and his aim is to demonstrate if it is necessary to realize a delimiting between the crime committed by slight injuries (psychic moderate hurt) and the crime committed by damage. Is evident that the information obtained and existing leads us to conclude that the governing verbs that produce psychic damage are not enough, provided that they lack a requirement that in our opinion is indispensable, the habitual

Finally, after checking the doctrine it has come near to the conclusion that the legislative technology used by the legislator has not been the correct one, provided that it appreciates that the humiliations, insults, offenses are not causers of psychic hurts, nevertheless if these events, they are reiterative, habitual and damage such as depression, insecurity, disorders of the supply, disorders of anxiety or alterations of the dream between others, they might form as a type of injury and with the corresponding know-hows there would decide the existence of a psychic affectation.

KEYWORDS:

Psychological violence, psychic damage, psychological damage, crime of injury, honor.

INTRODUCCIÓN

En el presente proyecto de investigación se pretende llegar a una interpretación uniforme del artículo 122 del Código Penal Peruano, puesto que de la lectura de mismo se llega a la conclusión que la técnica que ha empleado el legislador ha generado una variedad de interpretaciones en lo que respecta al momento de calificar un hecho delictivo cuando se ha vulnerado el honor de una persona. Es decir que producto de esta, se puede confundir el delito de lesiones leves por daño psíquico moderado con el delito de injuria.

En relación a lo anteriormente señalado nuestro Código Penal establece delitos de acción pública y de acción privada, estos últimos conocidos como “querellas”, los cuales son delitos contra el honor a la persona por lo tanto en este proyecto se abordará si puede existir una confusión entre el delito de lesiones leves por daño psíquico, con los delitos contra el honor como la injuria, ya que dicho delito protege el honor hacia la persona. Por otro lado, se analizará cual delito es más factible denunciar ante la autoridad competente, si un delito de lesiones leves por violencia psicológica moderada o un delito de acción privada como una injuria, con respecto al daño psíquico que puede sufrir una persona.

Esencialmente la presente investigación se centra en saber aplicar el tipo de penal de lesiones leves por daño psíquico moderado y el delito contra el honor de injuria al hecho concreto, es decir al hecho violento reprochable socialmente, que genera una lesión a la psiquis de la persona humana, dado que, la actual redacción de la legislación resulta confusa al momento de su interpretación, por lo que la falta de un criterio uniforme para su respectiva aplicación. De igual forma en el presente proyecto de investigación se busca analizar la posibilidad de que se uniformicen criterios de interpretación, ya que la doctrina demarca claramente cuál es su ámbito de protección de cada tipo penal.

Por lo que dando pie a estas posturas, pasaremos a estudiar estos dos tipos de delitos en su origen y naturaleza, a efectos de alcanzar un análisis de sus elementos objetivos y subjetivos, sus consecuencias y entrar a comparar la normativa vigente, con el único fin de aportar a toda nuestra comunidad jurídica.

El autor

CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1. DELITO DE LESIONES

1.1.1. Tipificación del Delito de Lesiones

En tiempos primitivos el culpable de algún delito era sancionado con la venganza de la víctima o de su familia, es decir la venganza por mano propia. Posteriormente aparece la aplicación de la Ley del Tali3n que surge con el C3digo de Hammurabi en el a3o 1950 a.c, en el que se establece “ojo por ojo, diente por diente.”, la misma que regir3 en un inicio el castigo para las lesiones ocasionadas.

En el antiguo Derecho Penal, se centraba la atenci3n en la valoraci3n real de las lesiones corporales, incluyendo como tal la entidad del mal producido, seg3n la importancia del miembro afectado, y la condici3n personal del lesionado. Sobre este criterio cuantitativo la sanci3n penal suele obedecer a una doble sistem3tica: la rigurosamente talional y la de compensaci3n mediante el pago de una determinada suma de dinero que sustitu3an idealmente al dolor sufrido por el correspondiente detrimento en la salud o integridad.

Cabe indicar que en un inicio el delito de lesiones se limit3 a la protecci3n de la integridad f3sica, no obstante con la evoluci3n del derecho penal ahora protege la salud. Asimismo se aprecia una evoluci3n dado que las legislaciones anteriores al no definir un concepto de lesi3n se caracterizaban por una casuística muy amplia, en cambio en los c3digos actuales esta se ve generalizada.

La violencia por lo general se manifiesta en las lesiones físicas o psicológicas inferidas a la víctima, las cuales se encuentran tipificados en nuestro ordenamiento jurídico penal como delito de lesiones, regulado en la sección de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud de nuestro C. P, en su modalidad de lesiones leves y graves.

Las lesiones graves se encuentran tipificadas en el art. 121° del C.P de la siguiente manera:

Artículo 121.- Lesiones graves

El que causa a otro daño grave en el cuerpo o en la salud, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones graves:

- 1. Las que ponen en peligro inminente la vida de la víctima.*
- 2. Las que mutilan un miembro u órgano principal del cuerpo o lo hacen impropio para su función, causan a una persona incapacidad para el trabajo, invalidez o anomalía psíquica permanente o la desfiguran de manera grave y permanente.*
- 3. Las que infieren cualquier otro daño a la integridad corporal, o a la salud física o mental de una persona que requiera treinta o más días de asistencia o descanso según prescripción facultativa, o se determina un nivel grave o muy grave de daño psíquico.*
- 4. La afectación psicológica generada como consecuencia de que el agente obligue a otro a presenciar cualquier modalidad de homicidio doloso, lesión dolosa o violación sexual, o pudiendo evitar esta situación no lo hubiera hecho.*

En los supuestos 1, 2 y 3 del primer párrafo, la pena privativa de libertad será no menor de seis años ni mayor de doce años, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes:

- 1. La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, magistrado del Tribunal Constitucional, autoridad elegida por mandato popular, o servidor civil, y es lesionada en ejercicio de sus funciones o como consecuencia de ellas.*

2. *La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición.*

3. *Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima.*

4. *El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía.*

Cuando la víctima muere a consecuencia de la lesión y el agente pudo prever este resultado, la pena será no menor de ocho ni mayor de doce años. En este caso, si la muerte se produce como consecuencia de cualquiera de las agravantes del segundo párrafo se aplica pena privativa de libertad no menor de quince ni mayor de veinte años.”

Por otro lado las lesiones leves se encuentran reguladas en el art. n° 122 del C.P en los siguientes supuestos:

Artículo 122.- Lesiones Leves

1. *El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.*

2. *La pena será privativa de libertad no menor de seis ni mayor de doce años si la víctima muere como consecuencia de la lesión prevista en el párrafo precedente y el agente pudo prever ese resultado.*

3. *La pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años e inhabilitación de acuerdo al artículo 36, cuando:*

a. *La víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú o de las Fuerzas Armadas, magistrado del Poder Judicial, del Ministerio Público o del Tribunal Constitucional o autoridad elegida por mandato popular o servidor civil y es lesionada en el ejercicio de sus funciones oficiales o como consecuencia de ellas.*

b. *La víctima es menor de edad, adulta mayor o tiene discapacidad y el agente se aprovecha de dicha condición.*

c. La víctima es mujer y es lesionada por su condición de tal, en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B.

d. La víctima se encontraba en estado de gestación;

e. La víctima es el padrastro; madrastra; ascendiente o descendiente por consanguinidad, adopción o por afinidad; pariente colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o adopción, o segundo grado de afinidad; habita en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, y la violencia se da en cualquiera de los contextos de los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-B.

f. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación sea de autoridad, económica, laboral o contractual y el agente se hubiera aprovechado de esta situación.

g. Para cometer el delito se hubiera utilizado cualquier tipo de arma, objeto contundente o instrumento que ponga en riesgo la vida de la víctima.

h. El delito se hubiera realizado con ensañamiento o alevosía.

4. La pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de catorce años si la víctima muere como consecuencia de la lesión a que se refiere el párrafo 3 y el agente pudo prever ese resultado.”

Por lo tanto podemos observar que las lesiones graves requieren para su configuración treinta o más días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa; asimismo en cuanto a las lesiones leves es de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, y finalmente las faltas contra las personas en el artículo 441 del C.P que se produce cuando el agente causa a la víctima una lesión dolosa que requiera de hasta 10 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa.

Respecto a las penas privativas de libertad para los referidos delitos en caso de lesiones graves es de no menor de 4 ni mayor de 8 y en lesiones leves no menor de 2 ni mayor de 5 años, con sus respectivas agravantes que pueden exceder dichos límites, siendo que ambos delitos sancionan como lesiones agravadas las que se infieren a las víctimas mujeres y que son

lesionadas en su condición de tal con una pena no menor de 6 ni mayor de 12 años en lesiones graves y no menor de 1 ni mayor a 3 años, en lesiones leves.

1.1.2. Bien Jurídico Protegido

Se interpretó por mucho tiempo que el delito de lesiones buscaba proteger la integridad corporal, es decir solo se vio su aspecto físico y se dejó de lado su aspecto psíquico, no obstante el delito de lesiones tiene como bien jurídico protegido a la salud, la cual es definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado de bienestar físico, mental y social. Por lo que en algunos casos no se podrá acreditar una lesión material, sino inmaterial, cuando ha de verse la afectación de la integridad psíquica del ofendido, lo importante es que exterioricen un real menoscabo. (Cabrera, 2011, p. 226)

A partir de lo dicho se debe tener en cuenta que la salud es un factor muy importante en el desarrollo integral de la persona, lo cual repercute en la sociedad generando relaciones equitativas y armoniosas entre las personas, en tal contexto surge normativa para poder acreditar no solo las lesiones físicas sino también el daño psíquico, tal como en el año 2016 la Guía de Valoración del Daño Psíquico en Personas Adultas Víctimas de Violencia Intencional.

1.1.3. Delito de Lesiones en Legislación Comparada

Investigando acerca de la tipificación del delito de lesiones nos pudimos percatar que en otros países no utilizan el criterio de los días de incapacidad médico legal a fin de determinar la modalidad del delito así como la sanción respectiva, por el contrario hacen uso de la entidad del órgano afectado, por lo que a manera de análisis citaré la legislación española, colombiana y costarricense.

El Código Penal Español se regula en el art. 147° que el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico.

Asimismo, el Código Penal Español en su inc. 4, artículo 148° prevé una pena de 2 a 5 años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, y finalmente en cuanto aquellas lesiones de menor gravedad aun cuando la víctima no hubiese convivido con el agresor mediando una relación de afectividad de 6 meses a 1 año, entre otros.

Respecto a la legislación de Costa Rica es interesante resaltar que si prevé el delito de lesiones en base a los días de incapacidad médico legal como el caso de lesiones leves con una pena de 3 meses a 1 año o hasta 50 días multa cuando exista un daño al cuerpo o la salud por más de 10 días y por 1 mes, por lo que podemos ver cierta benevolencia en cuanto a la sanción, respecto a las lesiones graves y gravísimas toma en cuenta situaciones como trastorno emocional severo, marca indeleble en el rostro, debilitamiento persistente en la salud, imposibilidad de usar un órganos, entre otros.

En el caso de Colombia cuenta con un Reglamento Técnico para el Abordaje Integral de Lesiones en Clínica Forense, en la que establece la pena de acuerdo a criterios como deformidad física transitoria con una pena de prisión 16 a 108 meses y multa de veinte 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, incrementado la pena para la deformidad permanente y deformidad en el rostro. Asimismo regula la perturbación psíquica la cual puede

ser permanente o transitoria, considerando permanente a aquella que tenga una duración mayor a seis meses y transitoria cuando tiene una duración entre cuatro a seis meses.¹

1.1.4. Valorización del Delito de Lesiones

1.1.4.1. Incapacidad médico legal

Para comprender la valorización que se da en el delito de lesiones primero debemos entender preliminarmente el concepto de incapacidad médico legal, que se utiliza como pericia médico legal para determinar si ante un daño físico o psíquico nos encontramos frente a lesiones leves, graves o faltas de ser el caso.

Así pues, la incapacidad médico-legal es un criterio clínico con fines jurídicos, que establece un perito médico u odontólogo basado en el análisis sobre la gravedad del daño (características, magnitud de la lesión, compromiso estructural y/o funcional, entre otros) y el tiempo necesario para el proceso de reparación de la alteración orgánica y/o fisiopatológica ocasionada. Se debe tener en cuenta las condiciones específicas de la persona evaluada que puedan incidir en la evolución clínica de la lesión (edad, el estado previo de salud, las circunstancias en las cuales se produjo la lesión, si hubo o no manejo médico y de qué tipo, entre otras). De tal manera que debe evaluarse la afectación de la salud de la persona de manera global e íntegra. (Velásquez, 2016)

La incapacidad médico-legal se expresa en un número de días, que se contabilizan a partir de la fecha en que ocurrieron las lesiones, de tal manera que a partir de dicho número se determinará la sanción respectiva, quiero hacer énfasis en que la evaluación médica debe ser integral, criterio que muchas veces no es tenido en cuenta por los peritos basándose en el daño efectivo materializado, dejando de lado circunstancias en que se produjo la lesión, entre otros

¹ *Reglamento Técnico para el Abordaje Integral de Lesiones en Clínica Forense*, Bogotá, 2010

factores que dejan secuelas en la víctima de violencia, de ahí que dicha problemática se refleje en muchos fallos que se rigen estrictamente por los días, poniendo a la víctima una vez más en situación de vulnerabilidad.

1.1.4.2. Criterios de Valorización de Lesiones Físicas y Psíquicas

De acuerdo con lo estipulado en el C. P peruano, no toda lesión física o psíquica infringida por una persona contra otra supone un delito. Es decir, para que sea considerado como tal se necesita probar un cierto grado de gravedad, tarea con la cual colaboran los médicos del Instituto de Medicina Legal.

Respecto a la valorización de las lesiones físicas en el código penal respecto al delito de lesiones podemos apreciar que a efecto de determinar cuando estamos ante la presencia de un delito o de una falta hay dos criterios: uno cronológico y otro cualitativo. El cronológico se establecen los días de asistencia o de descanso que tendrá el paciente para su recuperación, en tal sentido si no pasa de 10 días será considerado una falta, si es de 10 días a 29 días será lesión leve y si es de más de 30 días será una lesión grave; y el cualitativo incluye por ejemplo la mutilación de un miembro u órgano del cuerpo, así como anomalía psíquica.

Se distinguen 3 niveles de daño, entre ellos el nivel lesional, el mismo que abarca aspectos biológicos del daño; el nivel funcional el cual valora la afectación de las capacidades físicas y mentales de la persona; y por último el nivel situacional, el que abarca la alteración de las actividades que realiza la persona en su vida diaria, familiar, social, de placer, de trabajo u otras a causa de la lesión (Velásquez, 2016).

Al respecto un aspecto interesante que pude apreciar de la guía del instituto medicina legal fue que dado que no se puede abarcar todo el período de curación de la lesión para

determinar los días de incapacidad médico legal solo se toma en cuenta la fase reparación biológica inicial, fase en la que se producen los fenómenos inflamatorios y de reparación, y no se toma en cuenta la reparación biológica tardía, donde se producen principalmente fenómenos de reabsorción y remodelación, a efectos de obtener el mayor grado de restitución biológica.

Existe una tabla referencial de valoración médico legal de lesiones, la cual comprende una serie de parámetros para determinar los días de incapacidad médico legal en adultos y niños, en dicha tabla, muchas lesiones como heridas, excoriaciones y hematomas que por lo general diagnostican a las mujeres víctimas de violencia producto de los golpes propinados por sus agresores califican como faltas o lesiones leves en el peor de los casos, prescribiendo mayores días de incapacidad médico legal recién ante la existencia de fracturas, traumatismo encéfalo craneano, entre otros.

Si bien es cierto, se determina el delito de lesiones leves, una incapacidad de once días a treinta como puede ser una contusión, excoriación, herida, entre otros no parece ser tan leve, ya que puede provocar un detrimento o menoscabo del equilibrio funcional sea general o parcial, físico o mental del organismo de una persona.

Respecto a la Guía de Valoración del Daño Psíquico en Personas Adultas Víctimas de Violencia Intencional.- se toma las variables de:

- a) La organización de la personalidad la cual examina el grado de vulnerabilidad de la víctima, estableciendo que no toda persona responde un mismo grado de daño psíquico por el mismo hecho o acontecimiento lesivo similares.
- b) Entorno sociocultural, la que toma en cuenta el estado socio cultural y económico de la víctima al momento de sufrir el daño psíquico.

- c) Descripción del evento/situación traumática: se considera factores como el escenario de violencia, evento violento, relación de dominio sobre el examinado, objetos empleados, entre otros.
- d) Curso de la historia del daño psíquico: se considera la etapa del ciclo de vida en que ocurrió el hecho violento, evolución de los síntomas relacionados con el trauma, contraste entre los cursos actual, posterior y pre- existente.
- e) Tiempo: se considera la aparición de los signos o síntomas relacionados con el hecho violento y si se trata de un cuadro agudo, crónico, con secuelas o reagudizaciones, entre otros.
- f) Evaluación clínica-forense: se considera el registro de los indicadores de la matriz de la Guía y su correspondiente calificación y análisis. Asimismo, se consideran las áreas de funcionamiento psicosocial: personal, pareja, familia, sexual, social, laboral/académica del examinado(a).
- g) Proyecto de vida, analizando si es reversible o irreversible.
- h) Consistencia de los indicadores de daño psíquico encontrados con los hechos de violencia referidos: se considera la consistencia de la relación causal entre los indicadores encontrados de daño psíquico y el relato de violencia(s) referido(s) por la persona examinada² (URETA, 2016).

Ahora bien, para determinar la sanción correspondiente se utilizan indicadores, el mismo que se basa en tres criterios: alteración de la función/capacidad, presencia/persistencia del indicador e interferencia en las funciones.

² Instituto de Medicina Legal (2016), *“Guía de Valoración del Daño Psíquico en Personas Adultas Víctimas de Violencia Intencional”*, Lima - Perú, p.20

Respecto a la calificación, el daño psíquico puede ser: ausente, leve, moderado, grave y muy grave. Obviamente tenemos que en el ausente no existe presencia del indicador, en cuanto al leve existe una mínima deficiencia en la función o capacidad, en cuanto a la presencia existen molestias temporales y en la interferencia de funciones no se afecta la capacidad de autonomía de la víctima. Seguidamente el nivel moderado la persona requiere un esfuerzo en cuanto a su alteración, la presencia es persistente y causa interferencia en las actividades cotidianas de la víctima, la misma que necesitará ayuda para salir adelante. Respecto al nivel grave existe un nivel severo en la afectación de la capacidad o función, existe el riesgo para su integridad física o mental, la presencia es recurrente, y la víctima no logra controlar los síntomas, requiriendo de soporte externo tal como fármacos. Y por último el nivel muy grave se tiene un total o casi total deficiencia de la función o capacidad, la existencia de un alto riesgo para su integridad física o mental o la de los demás y en cuanto a su autonomía la víctima es incapaz de continuar con sus actividades cotidianas sin el soporte externo de terceros y/o un entorno supervisado a tiempo parcial y completo.³

Teniendo en cuenta que la guía busca establecer criterios para la evaluación del daño psíquico, este no contempla un sistema de medición en días de incapacidad o atención médica, no obstante el artículo 124-b de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar-Ley n.º 30364 establece la determinación de la lesión psíquica, con la siguiente equivalencia: “a. Falta de lesiones leves: nivel leve de daño psíquico. b. Lesiones leves: nivel moderado de daño psíquico .c. Lesiones graves: nivel grave o muy grave de daño psíquico”.

En tal sentido, esta guía reconoce que contar con un instrumento de valoración del daño psíquico coadyuvará a la realización del derecho humano a acceder a la justicia de conformidad con lo establecido en el artículo 25 en relación con el 1.1 de la Convención Americana. Es por ello que, aun cuando los psiquiatras de los centros de salud estatales

³ Instituto de Medicina Legal (2016), “*Guía de Valoración del Daño Psíquico en Personas Adultas Víctimas de Violencia Intencional*”, Lima - Perú, p.29

puedan determinar la atención facultativa de las víctimas de violencia familiar, su diagnóstico está limitado a determinar los síntomas que se presentan en el paciente en ese preciso instante, mas no las causas ni la existencia de síntomas anteriores y los hechos que puedan causarlos; así, sus evaluaciones no contribuyen a la acreditación de la relación entre el daño psíquico detectado y el hecho de violencia sufrido.

Por lo que la autora Guzmán (2016) en su obra *Judicialización de la violencia familiar psicológica: valoración del daño psíquico en Perú* afirma lo siguiente:

Los casos de violencia psicológica registrados en el Perú que constituyen casi un tercio del total de denuncias por violencia familiar, quedan impunes pues solamente se acude a la vía tuitiva para que se dicten medidas de protección y se otorgue judicialmente una reparación civil a la víctima. Se descarta el ejercicio de la acción penal por la inviabilidad de acreditar la configuración del delito a través de certificados médicos o pericias que dispongan la atención facultativa de la víctima por violencia psicológica. Esta realidad impide el ejercicio del derecho de acceso a la justicia de las víctimas en la vía penal, en contraposición la política estatal orientada a reprimir la violencia familiar.

No obstante, no existe en la actualidad una adecuada capacitación de los peritos psicólogos que determinan el daño producido en la víctima, por lo que deberán de establecerse criterios más objetivos para su evaluación como podría ser a semejanza de la legislación colombiana el establecimiento de un plazo a partir del cual se determine si se trata de lesiones leves, graves o faltas de ser el caso, ello en virtud de la responsabilidad que recae en el Ministerio Público de elaborar, a través del instituto de medicina legal y ciencias forenses, guías y protocolos para la actividad científico-forense y en los procesos judiciales, siendo responsable de su difusión a efectos de uniformar criterios de atención y valoración.

En tal contexto, el daño psíquico no debe verse como insignificante, a comparación del daño físico, al no poder determinarse a simple vista dado que este se tornaría en una herida, invisible en un inicio pudiendo agravarse e interrumpir el libre desarrollo de la víctima, atentando contra un derecho fundamental de la mujer.

1.2. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

1.2.1. Definición

La violencia es un fenómeno social que atraviesa a la sociedad peruana y permea el conjunto de las relaciones sociales. Es de naturaleza multicausal y de expresión pluridimensional, puede ser pública o privada. Por tanto, existen diferentes manifestaciones y escenarios en los que se presenta y donde las víctimas son principalmente las personas de las poblaciones más vulnerables por su condición de género, edad, clase y etnia.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", establece en el artículo 1, que la violencia contra la mujer es "cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

Estudios sobre la violencia doméstica y/o violencia contra la mujer reiteran que ésta es:

- Una de las expresiones más extremas de desigualdad de género.
- Una violación a los derechos humanos de las mujeres y a sus libertades fundamentales.

- Un problema de salud pública.
- Un gran obstáculo para el desarrollo. Amenaza a la estabilidad, seguridad y bienestar de las familias

En el plano nacional tenemos la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar- ley n° 30364, la cual define en su artículo 5° la violencia contra las mujeres como cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado.

La violencia contra las mujeres, desde la perspectiva de género, y a diferencia de otros tipos de violencia, se presenta como una agresión a los Derechos Humanos, cuya expresión práctica y objetiva es el trato indigno, y como cita Acosta (2016), “una conducta que supone una doble acción: la continuidad propia del trato y el ataque a la dignidad como valor superior de la persona, lo cual conlleva que previamente se le haya restado significado como derecho fundamental”.

Según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta que, basada en su condición de género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado⁴.

Según la Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra

⁴ Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2016), “Violencia Basada en Género Marco Conceptual para las Políticas Públicas y la Acción del Estado”, Lima

persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastorno del desarrollo o privaciones. La violencia se da en todos los niveles: político, económico, social, laboral e intrafamiliar; de igual manera se presenta en los diversos espacios la calle, el colegio, el hospital, la empresa, el hogar, etc.; evidenciada por múltiples formas: física, psicológica, sexual, verbal y económica. Esta conducta tiene diversas representaciones: suicidio, homicidio, desaparición, secuestro, masacre, maltrato, chantaje, ultraje, etc.; afectando a todo tipo de población: niños, niñas, jóvenes, adultos, hombres, mujeres, en calidad de víctimas o victimarios y hace parte de nuestra vida cotidiana⁵.

Esta manifestación del ejercicio de poder de una persona sobre otra, afecta la salud física, sexual y/o psicológica de las personas que la sufren, principalmente las mujeres y las niñas; sin embargo, la violencia es un problema que generalmente se calla y se oculta principalmente por la propia víctima; se la instituye como práctica cotidiana, perpetuándose a través de generaciones en la crianza de las hijas e hijos; los que a su vez pueden replicarla cuando son padres.

1.2.2. Tipos de Violencia Contra la Mujer

1.2.2.1. Violencia Física

Es la acción o conducta, que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas, que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo.

⁵ Organización Mundial de la Salud (2002), "Informe mundial sobre la violencia y la salud", Ginebra.

La violencia física o corporal, también es considerada una invasión del espacio físico de la otra persona, la cual puede hacerse de dos formas: una es a través del contacto directo con el cuerpo de la otra persona por medio de golpes, empujones; la otra es al restringir sus movimientos encerrándola, causándole lesiones con armas blancas o de fuego, en ocasiones forzándola a tener relaciones sexuales y ocasionándole la muerte.

1.2.2.2. Violencia Psicológica

Es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, ocasionándole daños psíquicos.

Para Muñoz (2013), el concepto de daño psicológico hace alusión a todos aquellos desajustes psicológicos derivados de la exposición de la persona a una situación de victimización criminal.

Respecto a las consecuencias psicológicas Navarro (2014) señala que de la afirmación de que entender y valorar la violencia doméstica y el daño psíquico asociado, debemos centrarnos en el padecimiento, consecuencias y secuelas que para la víctima tiene, y no tanto en el comportamiento e intencionalidad del agresor. Por lo que las consecuencias psicopatológicas más frecuentes de la violencia psicológica son:

- Trastorno por estrés postraumático (TEPT)
- Depresión

- Trastornos de ansiedad (ansiedad generalizada, ataques de pánico, agorafobia...)
- Trastornos de la alimentación
- Alteraciones del sueño
- Abuso y dependencia de sustancias
- Problemas psicosomáticos
- Baja autoestima
- Problemas crónicos de salud
- Inadaptación. Aislamiento.
- Problemas de relación social/familiar/laboral
- Suicidio

1.2.2.3. Violencia Sexual

Son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación.

1.2.2.4. Violencia Económica o Patrimonial

Es la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona, a través de:

- La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes.
- La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.
- La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias.
- La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

Entre los eventos violentos que causan mayor impacto psíquico están los que provienen de aquellas figuras de la familia que tienen un rol de cuidado y protección o aquella violencia proveniente de los funcionarios del Estado. Asimismo se sugiere considerar diferentes escenarios de la violencia en función de las características de quienes cometen el acto de violencia. Para efectos de la presente investigación, tomaremos esa referencia y clasificaremos los escenarios de la violencia en: a) violencia al interior de las familias, b) violencia comunitaria y c) violencia colectiva.

- Violencia al interior de las familias. Se refiere a la violencia que se produce entre los miembros de la familia o de la pareja, cualquiera sea la forma o denominación que ésta adquiera, y que usualmente se produce al interior de los hogares. Se incluyen formas de violencia contra la pareja y el maltrato a las personas menores y adultos mayores.

- Violencia comunitaria. Es la que se produce entre individuos no relacionados entre sí y que pueden conocerse o no. Son formas de violencia comunitaria: la violencia juvenil, los actos violentos delictivos, las violaciones y las agresiones sexuales por parte de extraños, y la violencia en establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, prisiones y geriátricos.

- Violencia colectiva. Es aquella usada instrumentalmente por personas que se identifican a sí mismas como miembros de un grupo frente a otro grupo o conjunto de individuos, con la finalidad de lograr objetivos políticos, económicos o sociales. Adopta diversas formas: conflictos armados dentro de los Estados o entre ellos; tortura, genocidio, represión y otras violaciones de los derechos humanos; terrorismo; crimen organizado.

1.2.3. La Salud Mental de las Personas

La salud mental es un estado dinámico de bienestar subjetivo, en permanente búsqueda de equilibrio, que surge de las dimensiones biopsicosociales y espirituales del desarrollo y se expresa en todas las esferas de la conducta de la persona (comportamientos, actitudes, afectos, cogniciones y valores); todo lo cual se plasma en el establecimiento de relaciones humanas equitativas e inclusivas, de acuerdo a la edad, sexo, etnia y grupo social,

así como en la participación creativa y transformadora del medio natural y social, buscando condiciones favorables para el desarrollo integral, individual y colectivo⁶.

La salud mental, a nivel individual, implica entre otros aspectos: a) la asunción de un proyecto de vida a partir del reconocimiento de las propias agencias y limitaciones; b) la capacidad de autocuidado, empatía, tolerancia y confianza en la relación con las demás personas; c) la facultad de postergar impulsos, deseos, gratificaciones inmediatas al mediar un pensamiento guiado por valores y principios sociales y culturales interiorizados; d) el reconocimiento de la diferencia y límites entre el mundo subjetivo y la percepción consensuada de la realidad; e) la acción creativa y transformadora del medio, generadora de condiciones favorables para el desarrollo de los recursos personales; f) la capacidad de disfrute y de buscarle sentido a la vida.⁷

La salud mental, lejos de ser entendida únicamente como la ausencia de enfermedad mental, responde a un proceso dinámico, no exento de conflictos, producto de la interacción entre el entorno, los determinantes sociales y el despliegue de las diversas capacidades humanas. Implica la búsqueda de equilibrio y sentido de la vida, así como el reconocimiento de las capacidades y limitaciones constituyéndose en eje transversal del desarrollo humano.

Consideramos, central entender el concepto de salud mental en función del contexto sociocultural, más aún, en un país diverso y multicultural como es el Perú. Hablar de salud mental requiere un enfoque intercultural y prestar atención a las variables de pobreza, exclusión y discriminación. En ese sentido, la salud mental no sólo está basada en condiciones subjetivas, lo está también en las condiciones objetivas. Por tanto, las condiciones psicosociales como la pobreza, la exclusión y la violencia pueden ser factores desestabilizantes del bienestar humano.

⁶MINSA (2004). *Lineamientos para la Acción en Salud Mental*. Lima: Dirección General de Promoción de la Salud y MINSA.

⁷ GTSM Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. (2007). *Salud Mental Comunitaria en el Perú: Aportes temáticos para el trabajo con poblaciones*. Lima: Proyecto AMARES PERU.

1.2.4. La experiencia de violencia

Sostendremos que el evento violento genera un trauma en tanto considere la particular respuesta de la víctima, de forma que si bien habrá un impacto frente a la violencia, la intensidad del mismo variará en función de los múltiples factores de riesgo y protección de la víctima.

Es decir, un acontecimiento violento no es en sí mismo traumático, ni necesariamente va a producir un daño psíquico. Benyakar (2003) sostiene que no se puede afirmar a priori que una persona ha sufrido un “trauma” basándose sólo en la intensidad, duración y exposición del hecho violento. Se debe tener en cuenta la manera singular de la vivencia en que las personas elaboran psicológicamente el impacto de la violencia, el entorno sociocultural en el que éste se produce y es significado, así como las características específicas del evento fáctico ocurrido. El mismo autor diferencia tres aspectos en la situación de violencia causante de daño psíquico: a) el evento fáctico, b) la vivencia y c) la experiencia.

- a) El evento fáctico se refiere al hecho concreto que tiene la capacidad potencial de irrumpir en la vida de las personas y de provocar una discontinuidad o “disrupción” alterando un estado de equilibrio precedente al hecho. La capacidad desestructurante del evento fáctico se potencia cuando es inesperado, interrumpe procesos vitales, amenaza la integridad física y psicológica, mina el sentimiento de confianza, contiene rasgos novedosos no codificados y distorsiona el hábitat cotidiano.
- b) La vivencia se refiere al modo singular en que un sujeto procesa el evento fáctico violento en su mundo intrapsíquico. Ante un hecho exógeno se moviliza en el psiquismo la capacidad de articular los afectos con los procesos de pensamiento. La vivencia traumática ocurre cuando el evento fáctico tiene el poder de fracturar los

procesos de articulación entre afectos y pensamientos lo que produce fallas en la elaboración psíquica.

- c) La experiencia se refiere a la articulación psicológica entre el evento fáctico y la vivencia. Mientras que la vivencia es el modo intrapsíquico que cada persona tiene para sentir y metabolizar los hechos de violencia, procesos donde varios de ellos no son conscientes, la experiencia es necesariamente pensable y comunicable. Las personas hablan de sus experiencias, describen los hechos y expresan la percepción que tienen de los efectos del evento en ellos. Es una narrativa personal de lo ocurrido que guarda relación con la vivencia pero que no la puede abarcar ni expresar del todo.

1.3. El DAÑO

1.3.1. Definición

Desde el punto de vista etimológico, la acción de dañar proviene del término en latín “Damñare” que significa condenar; entendiéndose de esta manera como la condena, afección o castigo conferido a una persona, ya sea por acción u omisión. La Real Academia de la Lengua Española, entre sus definiciones, explica que dañar es causar detrimento, menoscabo, dolor o molestia.⁸

Partiendo de esta explicación, podemos conceptualizar de manera preliminar al daño como el resultado proveniente de la acción u omisión que provoca dolor, sufrimiento, detrimento o menoscabo hacia un individuo.

⁸ Real Academia Española. (2014). *Diccionario de la lengua española* (23.ªed.). Consultado en <http://www.rae.es/rae.html>

En sus inicios, el término daño fue utilizado para hacer alusión al detrimento patrimonial; sin embargo, el día de hoy engloba el ámbito no patrimonial. Eduardo Zannoni manifiesta que daño es todo quebranto, menoscabo u ofensa que recae sobre una persona determinada, afectando sus bienes patrimoniales o perturbando como producto de este daño a la persona en sí (Zannoni, 1987)

Hans Fischer respecto del daño señala que comprende todos los perjuicios que el individuo, sujeto del derecho, sufra en su persona y bienes jurídicos, con excepción de los que se irroge el propio perjudicado. (Fischer, 1928). De esta manera, el autor engloba tanto el perjuicio personal, como patrimonial, descartando el daño que el mismo individuo se llegase a provocar y que no configura daño desde el punto de vista jurídico.

1.3.2 Clasificación del Daño

La ciencia del derecho a lo largo de la historia jurídica moderna ha intentado delimitar las clases de daño según la naturaleza y orígenes del mismo. Al ser un término con implicaciones tanto jurídicas como de la vida cotidiana, la falta de un desglose adecuado de las categorías del daño podría derivar en subjetividades a la hora de aplicación objetiva de justicia.

En función de la naturaleza de quien sufre el daño, tenemos el daño objetivo y subjetivo, siendo que en el primero es aquel menoscabo ocasionado contra los elementos no humanos, es decir a los bienes del individuo, mientras que el segundo consiste en aquel menoscabo o detrimento que sufre el individuo en cuanto a su personalidad, es decir al ser humano en sí.

Desde otro punto de vista, en cuanto a las consecuencias que el daño provoca, existen dos tipos de daño, los que pueden ser reparados a través de indemnización económica y los que no pueden ser objeto de indemnización, siendo susceptibles de otras medidas reparatorias.

En materia de Derecho Penal, la clasificación atiende a diversos caracteres como el bien jurídico tutelado y las circunstancias del caso concreto que configuran el tipo penal.

A la par de la evolución científica del Derecho, se ha debatido ampliar el espectro de las categorías clásicas de daño, que históricamente han confluído en: patrimoniales y extrapatrimoniales. Sin embargo, en lugar de crear nuevas categorías, todas aquellas clasificaciones emergentes deberían encasillarse en una u otra categoría clásica.

Surge entonces una reformulación de las categorías, de tal manera que se resumirían a dos:

- **Daño Material o patrimonial:** Detrimento de los bienes del individuo, a su vez comprende:
 - Daño emergente
 - Lucro Cesante

- **Daño Personal:** Detrimento tanto de la integridad física, como de los rasgos internos del individuo, y comprende:
 - Daño Moral
 - Daño Psicológico

- Daño Físico
- Daño Social
- Daño al proyecto de vida

1.3.2.1. Daño Emergente

Así, "daño emergente" es, el perjuicio efectivo sufrido en el patrimonio de la víctima, que ha perdido un bien o un derecho que ya estaban incorporados a ese patrimonio, es decir el daño emergente corresponde al valor o precio de un bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio. Cuando el bien o la propiedad de una persona ha sido dañada o destruida por otra, estamos ante un daño emergente, y la indemnización en este caso será igual al precio del bien afectado o destruido.

1.3.2.2. Lucro Cesante

El lucro cesante hace referencia al lucro, al dinero, a la ganancia, a la renta que una persona deja de percibir como consecuencia del perjuicio o daño que se le ha causado. Si una persona no hubiera sufrido de un daño o perjuicio, se hubiera seguido lucrando sin problemas, lucro que se pierde, que cesa por culpa del daño o del perjuicio, y por supuesto que el responsable será quien causó el daño y el perjuicio, y en algunos casos tendrá que indemnizar a la víctima del daño o perjuicio.

1.3.2.3. Daño Moral:

Antes de abordar el concepto propiamente dicho de daño moral es necesario partir de lo que es la moral. La moral no es sino la agrupación de valores y rasgos definitorios de la

persona. Son todos aquellos caracteres ideológicos, espirituales, sentimentales que responden al fuero interno de cada uno y que viabilizan la interacción con la comunidad.

Se define al daño moral como todo perjuicio que no atenta al individuo en su fortuna o en su cuerpo... El daño comprende: la desconsideración que significa para la persona atacada el resultado del ataque, el dolor causado por la pérdida de una persona querida, los sufrimientos físicos, la pena, las inquietudes que son, a veces, la consecuencia del hecho dañoso.

El daño moral es entonces, aquel menoscabo que recae sobre cosas no susceptibles de apreciación sensorial. Produce entonces una afección a los caracteres inherentes del individuo que forman parte de su fuero interno, como las emociones y los sentimientos, que si bien no son tangibles, forman parte de la personalidad del individuo.

Es evidente entonces, que a más de ser un daño inmaterial, es producido por violaciones que en definitiva producen padecimiento al afectado. De esta manera, el daño puede ser constatado por la molestia, sufrimiento y quebrantamiento en la dignidad de la persona.

1.3.2.4. Daño Psicológico

Echeburúa, Corral (2004), desde una perspectiva más integradora, afirman que el daño psicológico se refiere por un lado, a las lesiones psíquicas agudas producidas por un delito violento que, en algunos casos, puede remitir con el paso del tiempo, el apoyo social o un tratamiento psicológico adecuado; y, por otro lado, a las secuelas emocionales que persisten en la persona en forma crónica, como consecuencia del suceso sufrido y que interfieren negativamente en su vida cotidiana. En uno u otro caso, el daño psíquico es la consecuencia de

un suceso negativo que desborda la capacidad de afrontamiento y de adaptación de la víctima a la nueva situación.

La definición de daño psíquico como “la afectación y/o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo”, implica considerar los conceptos jurídicos contenidos en la descripción de las distintas conductas delictivas del Código Penal que afectan la integridad y salud de las personas.

En el derecho civil, el daño psíquico es considerado por algunos autores como una dimensión del “daño a la persona”, que comprende el daño moral y el daño al proyecto de vida²⁶. Es decir, que el daño psíquico es una dimensión del daño a la persona, que comprende el daño moral y el daño al proyecto de vida.

Para Fernández Sessarego (2007), el daño moral, es el dolor o sufrimiento, enmarcado en el plano subjetivo, íntimo de la persona; es decir, que el evento dañino incide sobre la unidad psicosomática, más precisamente sobre la esfera afectiva de la persona. Se diferencia del “daño al proyecto de vida”, en que este último atenta contra la libertad de la persona para fijar sus metas y renovar sus proyectos, lo que afecta el sentido mismo de la existencia. Es decir, que ambas modalidades de “daño a la persona” se distinguen por sus consecuencias. Así, mientras el “daño moral” hiere los sentimientos y los afectos de la persona, por hondos que puedan ser, éstos no suelen acompañar al sujeto durante su transcurrir vital. El daño moral puede traer consigo daño psíquico. Las diferentes posturas hacen más una diferencia entre daño moral y daño al proyecto de vida, que frente al daño psíquico.

El daño al proyecto de vida es un daño de tal magnitud que afecta la manera en que el sujeto ha decidido vivir, trunca el destino de la persona, le hace perder el sentido mismo de su existencia. Es, por ello, un daño continuado que acompaña al sujeto durante todo su existir. No es una incapacidad cualquiera, sino que se trata de un daño cuyas consecuencias inciden sobre algo aún más importante para el sujeto como son sus propios fines vitales, los que le otorgan razón y sentido a su vida. Así, son ejemplos de daño al proyecto de vida, la infertilidad como consecuencia de la tortura sexual en mujeres y hombres, la maternidad impuesta como consecuencia de una violación, o la imposibilidad de desarrollar con éxito una determinada profesión.

A pesar de que un hecho violento es una experiencia extrema potencialmente generadora de daño psíquico, la manera en que una persona víctima procesa el acontecimiento violento es singular, así como la capacidad o dificultad de sobreponerse al hecho en sí. Afrontar psicológicamente las huellas dejadas por la violencia dependerá de varios factores a tener en cuenta: la etapa de desarrollo en que la persona experimentó el hecho violento, la capacidad de generar una narrativa integradora de la experiencia, las destrezas y recursos socioeducativos, las redes de soporte familiar, amical y social, la posición ética, religiosa o ideológica, el género, el status socioeconómico, el contexto sociopolítico, la cultura en la que la persona está inmersa, las capacidades resilientes, entre otros. Todos estos factores podrán potenciar, disminuir o inclusive no registrar el hecho violento como un daño psicológico.

1.3.2.5. Daño Físico

Se refiere al conjunto de daños que un hecho ilícito provoca en la integridad física del individuo. Se considera al daño biológico y físico como sinónimos.

Desde el punto de vista médico, en esta clase de daño intervienen dos clases de afecciones: una directa que se produce en el momento mismo del cometimiento del ilícito como una fractura o un corte, y otra afección que se produce por los posibles efectos secundarios o las secuelas que el daño provoque a futuro, como por ejemplo una infección proveniente del óxido contenido en un objeto corto punzante.

De esta manera se derivan dos subcategorías: el daño físico o biológico propiamente dicho (golpes, heridas, fracturas, mutilaciones) y el daño fisiológico que no siempre es visible por rasgos externos, pero que afecta a las funciones de los órganos, aparatos y sistemas del afectado.

1.3.2.6. Daño Social

Desde el punto de vista de la sociología del derecho se considera que la criminalidad no solo lesiona los intereses particulares de los individuos, sino que también lesiona el sentimiento de seguridad y probidad de los habitantes de una población determinada. El derecho, sobre todo la materia penal tiene un carácter profiláctico y ejemplificador que busca la paz social y evitar futuros delitos. El hecho delictivo entonces recae no solo sobre el ser, sino sobre el sentimiento colectivo de libertad y el derecho a un ambiente sano.

Pablo Galain se refiere al daño social cuando manifiesta que el delito además de un perjuicio material o moral, provoca la vulneración del ordenamiento jurídico (antijuridicidad formal) y produce un daño social (antijuridicidad material), unas veces, contra una víctima determinada, y otras veces, en perjuicio de víctimas difusas, pero siempre en menoscabo de la sociedad en general, titular del ordenamiento jurídico penal. (Galain, 2010)

1.3.2.7. Daño al Proyecto de Vida

La libertad nos permite como seres humanos la auto determinación en el sentido que somos libres de determinar el rumbo con el que queremos tomar nuestra vida y decisiones. A este concepto de libertad, los juristas lo han denominado “proyecto de vida”, que a decir de Fernandez Sessarego es el rumbo o destino que la persona otorga a su vida, es decir, el sentido existencial derivado de una previa valoración. (Fernández, 2002)

Estamos frente a casos donde las experiencias traumáticas provenientes del cometimiento de delitos repercuten de tal forma que ven al mundo que los rodea de forma diferente, errática e incluso pesimista, al punto de que actividades comunes se convierten en verdaderos desafíos.

1.4. DELITOS CONTRA EL HONOR

El contenido del derecho al honor depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento. El honor está vinculado a la dignidad humana, es un derecho personalísimo. Es decir el honor como cualidad propia de la persona humana, emanada de su dignidad y grandeza, se ha manifestado desde la antigüedad, evolucionando en su concepto e importancia pero manteniéndose vigente en medio del desarrollo social, económico y político, como un derecho inherente al hombre y que la ley debe proteger, garantizando con ello la armonía de la vida en sociedad y respondiendo a una motivación espontánea de ésta, cual es cuidar este bien subjetivo, este derecho a la integridad moral y social que constituye lo máspreciado con que el ser humano enfrenta la vida, su fin último y esencial, el concepto de sí, el respeto que su propia naturaleza humana le otorga, tanto para sí mismo como para los demás.

1.4.1. Bien Jurídico Tutelado

La concepción del bien jurídico tutelado "honor", en cuanto a su contenido material, ha sufrido toda una metástasis, producto de la misma evolución del hombre, del Estado y de la sociedad, dicha trilogía ha determinado ciertas consecuencias directas en la protección de dicho derecho subjetivo. Hondas y acaloradas discusiones que han incidido en toda una construcción de variedad de conceptos en cuanto a su contenido; (...) una abundancia de clasificaciones, apunta Lorenzo Copello, que si bien se formulan con el objetivo de echar luz sobre el problema, acaban por superponerse entre sí, aumentando todavía más el desconcierto a la hora de dotar de contenido a tan complejo bien jurídico. (Copello, 2002)

En principio, se debe señalar lo siguiente: el honor es un derecho inherente a la condición misma de persona, importa un atributo de los individuos que se encuentra relacionado con la misma dignidad humana, y con una visión no sólo personalista, sino también social del ser humano, en cuanto a sus relación con sus congéneres, por tanto, el honor no puede ser negado desde ningún tipo de clasificación discriminatoria, conforme al sexo, condición social y/o económica, proyección ideológica, cultural y/o religiosa, caracterización étnica u antropológica, pues según nuestra Ley Fundamental rige el principio constitucional de "igualdad" y de tolerancia con respecto a la diversidad, según los principios de un orden democrático de derecho. En suma, en una sociedad democrática y pluralista, el honor es ampliamente protegido, por esta riquísima significación, es decir, toda persona cualquiera que sea su posición social es igual que cualquier otra.

El honor es una cualidad común a todos y cada uno de los humanos, que nos corresponde en igual medida, proporción o intensidad.

Dicho lo anterior, cualquier persona, sea un condenado por haber cometido un delito, un confeso terrorista, una prostituta, homosexual, barrenderos, mendigo o cualquiera que

pueda manifestar un comportamiento "socialmente negativo", son portadores del "honor". En otras palabras, pueden ser sujetos pasivos de los injustos de injuria, calumnia y difamación. Cuestión muy distinta, es que en algunas ocasiones, las apreciaciones, valoraciones de menosprecio e imputaciones delictivas, al condecirse con la verdad no puedan resultar típicas, por otro, el honor como interés jurídico adquiere ciertos grados de desarrollo, de acuerdo a cada persona en particular.

El "honor" como se sostuvo, en cuanto a su concepción jurídica, ha sufrido muchos cambios en los últimos años, no sólo en lo que respecta a su propia estimación, sino también con la irrupción de otros intereses jurídicos también importantes en el marco de una sociedad democrática.

1.4.1.1. Posición Fáctica

Las primeras construcciones teóricas sobre el bien jurídico "honor", partían desde una posición fáctica propia de la ideología del positivismo, que se dividía en una doble vertiente: primero, desde un plano "objetivo", lo que implicaba la estimación que tenía la sociedad en cuanto a la honorabilidad del sujeto, de acuerdo a su comportamiento frente a sus congéneres, mientras más prestigio tuviese, el grado de afectación sería mayor, en cambio, aquellos que no tuviesen un mínimo de reconocimiento social por realizar ciertas conductas "reprobables" socialmente, prácticamente dicho contenido valorativo quedaría reducido drásticamente. Como depende de la suma de las valoraciones individuales que hacen terceras personas es probable obtener un término medio de buena o mala fama o de reconocimiento social, que podrá no ser pacífico ni ser realmente coincidente con una particular apreciación. (Gómez, 1997)

Mientras que el aspecto, "subjetivo" hace alusión a la estimación individual que cada uno tiene de sí mismo, quienes tienen una alta autoestima recibirán una mayor protección, de

modo contrario, quienes tienen una muy baja autoestima, quedarían fuera del ámbito de tutela jurídica. En palabras de Maciá Gómez, la autoestima o la propia estimación vienen a depender de los componentes subjetivos, personales, internos e incluso patológicos de cada persona (Gómez, 1997). El examen de la realidad permitirá constatar la presencia o no de ese sentimiento de honor o el contenido de la reputación; y sólo esa realidad, sin entrar a examinar su fundamentación, es la que recibe la tutela el Derecho penal. Se habla, entonces, de un honor "aparente".

1.4.1.2. Posiciones Normativas

Seguidamente toma lugar las posiciones normativas, de cuyo cuño teórico se desprende lo siguiente: el contenido del "honor" ha de ceñirse a la condición de persona humana, en lo que respecta al desarrollo de su personalidad y su participación en los procesos sociales, de ahí que se diga que este interés jurídico está vinculado con la idea de dignidad humana y, si todos los individuos son portadores de dicho revestimiento normativo, todos tienen el derecho de ser protegidos en su "honor" de forma igualitaria. Como dice Vives Antón, a la serie de manifestaciones concretas de la dignidad, ha de otorgarse tutela a la dignidad misma, de modo general y abstracto. Ese es el papel que desempeña el derecho fundamental al honor. (T.S. Vives Anton, 2004)

Por eso se dice, que la posición normativa se condice perfectamente con el principio jurídico-constitucional de "igualdad", todos merecen ser protegidos por el orden penal, se hace alusión a un "honor merecido". Para las concepciones normativas, el honor es parte de la dignidad de la persona, cuyo contenido aparece vinculado al efectivo cumplimiento de los deberes éticos. Surge así un concepto de honor directamente vinculado a la dignidad humana o, como lo formulan muchos de sus partidarios, un concepto personalista en que el honor aparece como un atributo de la personalidad que corresponde por igual a cualquier ser humano por el solo hecho de serlo, por su condición de ser racional.

En primer término, la vinculación de las relaciones sociales de reconocimiento a la dignidad como persona explica sin dificultad, que el honor sea un derecho que, al igual que la dignidad, debe ser apreciado en la totalidad de los miembros de la comunidad, con independencia de su comportamiento social. El derecho que tienen todos los ciudadanos, de no ser objeto de menosprecio y, de gozar de la estima de los demás, conforme al principio de igualdad. La actuación contraria a dichas expectativas constituye la lesión del honor. La lesividad del comportamiento supuestamente injurioso (delictivo), ha de valorarse de acuerdo a las características concomitantes del caso concreto. (Copello, 2002)

1.4.1.3. Posición adoptada (normativa-funcional)

Se adopta una perspectiva normativa-funcional, (Salgado, 1981) que de cierta forma se asemeja a la tesis "constitucionalista" de Berdugo, pero con sus propios matices y particularidades: primero, debemos partir que el "honor" es un atributo propio del ser humano, que emana de la "dignidad" que le viene dado por su condición de persona, por lo que dicho derecho subjetivo no puede ser negado por consideraciones de orden social, económico, cultural, etc.; segundo, el honor es un bien jurídico que adquiere grados de desarrollo, que tienen que ver con la realización del individuo como persona en un determinado sistema social, conforme va obteniendo determinados logros personales, proyectos profesionales, grados jerárquicos (funcionales, optimización académica, etc.), va adquiriendo un reconocimiento social (reputación), que puede verse seriamente menoscabado cuando se propala un juicio de valor ofensivo o la presunta comisión de un delito, lo que en todo caso, incide en el grado de afectación al bien jurídico, no en cuanto a la relevancia jurídico-penal de la conducta.

Por otro lado, ese mismo sujeto en su actuación con sus congéneres, puede ver mermado el reconocimiento social por realizar comportamientos que contravienen patrones sociales de alcance general, con ello nos referimos a conductas que son reprobados por todo el colectivo; quien golpea a su mujer, el que vive a costas de su esposa, si a éstos le dicen

cobarde, vividor, etc. Sin embargo, la veracidad de dichas conductas de todos modos mermará la posición social del afectado, en cuanto a su relación con los demás, constituyendo una lesividad que debe estimarse positiva, de acuerdo a la posición adoptada, lo que no obsta a que pueda ser denunciado por los ilícitos penales que pueda haber cometido. Cuestión distinta, se dará según el ámbito social, donde se propala la supuesta expresión ofensiva, cuando se hace mención, por ejemplo, a las deficiencias laborales de un empleado por parte del superior jerárquico. (Freyre, 2008))

Con todo esto, la lesividad de la conducta no ha de cifrarse conforme a los juicios de valor ético-sociales de la comunidad, sino en relación a la afectación de la autorrealización personal en el campo de las relaciones sociales, cuando la persona es desvalorada por los demás. Sin embargo, no olvidemos que será la persona misma (sujeto pasivo) quien decidirá ello, al ser delitos perseguibles a instancia del ofendido, puede en algunos casos que la revelación de una circunstancia propicie un juicio de valor "positivo", al margen de que la intimidad pueda verse afectada.

No habrá lesividad (tipicidad), en la medida que exista una correspondencia entre el juicio descalificativo con los hechos que son atribuidos al sujeto, siempre y cuando se dé en un determinado marco social, que no afecte la libertad de autodeterminación del individuo en su vida en sociedad. A quien se le condena por un delito y es llamado delincuente por la víctima en el juicio que ha de verter su testimonio, no habrá sido afectado en su honor, pero si, éste luego de purgar condena, sale en libertad, y es llamado así cuando pretende acceder a un puesto de trabajo, aún por virtud de un beneficio penitenciario, si se habrá lesionado el honor. (Freyre, 2008)

Del mismo modo, quien sufre de una enfermedad mortal y contagiosa como el VIH (Sida), al margen de establecer si el sujeto pasivo sea portador de dicha enfermedad, si se le dice "sidoso", como una vía de menosprecio será qué duda cabe una conducta constitutiva de

injuria, pues provocará el estigma social, pero si quien se lo dice, fue el contagiado por éste, a quien no le había dado conocimiento de la enfermedad, no se podrá hablar de una afectación personal, si recalca en un mecanismo de reacción inmediata, más no como una vía de desprestigio social ante el colectivo. (Soler, 1969)

1.4.1.4. El Honor Subjetivo

El honor subjetivo es la valoración que la propia persona hace de sus propios atributos.

El honor subjetivo está referido a la propia valoración y dignidad. Se trata de la imagen de sí mismo que tiene cada individuo y que se forma con independencia del resto de los componentes del grupo social.

De ello se desprende que el honor subjetivo, si bien puede ser vulnerado no puede ser despojado pues es la propia persona quien le da vida y significado. Como bien lo afirma Ramos, el honor puede ser herido pero no arrebatado. (Ramos, sf citado por Carlos Ducci, 1984) Va a depender de la sensibilidad de cada cual la dimensión de la ofensa, ya que, valga la redundancia, el honor subjetivo depende de cada sujeto con independencia de los demás y cada cual determina en qué medida su autovaloración se ve afectada. Humanamente es imposible encontrar una persona desprovista del sentimiento del honor. La misma autorreprobación está señalando ya que el honor existe aunque sea menoscabado.

1.4.1.5. El Honor Objetivo

El honor objetivo es la apreciación y la valoración que hacen los demás de las cualidades ético-sociales de una persona. Es la buena reputación de que se disfruta. El buen nombre es un patrimonio de elevada estimación. Pero solamente adquiere sentido en la estimación de los otros.

El honor objetivo o reputación, se refiere a la imagen social de la persona, formada por la comunidad que la rodea; si es un personaje público, esto se ve acentuado por la posición que tome frente a ella la prensa y los demás medios de comunicación masivos y que influyen sustancialmente en la opinión que se forma la sociedad toda.

1.5. EL DELITO DE INJURIA

1.5.1. Definición

Se refiere a la acción de menospreciar o deshonar a alguien, término que proviene del latín iniuria y que etimológicamente significa agravio u ofensa. En el lenguaje coloquial hay palabras sinónimas: insulto, afrenta, difamación, vituperio, blasfemia.

Injuriar a alguien supone decir algo ofensivo sobre otra persona y, por lo tanto, esta circunstancia es contemplada por la ley, que establece el delito de injurias.

Existen delitos contra el honor de las personas, pues el honor es un bien jurídico protegido por el derecho penal. Sin embargo, no todos los delitos contra el honor son iguales. De hecho, hay tres variantes posibles: la calumnia, la difamación y la injuria.

La calumnia es una falsa imputación, es decir, acusar a alguien de un delito a sabiendas de que dicha acusación es falsa. La difamación se fundamenta en la intención de dañar a alguien en su dignidad o reputación, de tal forma que un hecho es atribuido a alguien con el propósito de perjudicarlo (la peculiaridad de la difamación se basa en la utilización de algún medio de difusión, por ejemplo, la prensa, la radio o las redes sociales).

La injuria es semejante a la difamación y se refiere a la acción de menospreciar o deshonrar a alguien. De esta manera, si de una mujer se dijera que es una prostituta se estaría atentando contra su honor y tal acusación constituye un delito. El delito de injurias existe con el propósito de proteger la honorabilidad de cualquier persona.

Para que alguien sea penado por la ley por injurias es necesario que la persona ofendida ponga una querella para defender su honor ante el descrédito de la injuria. Por otra parte, desde el punto de vista del juez es preciso determinar que una ofensa tiene la intención de dañar moralmente a alguien, lo que en derecho es conocido con la expresión latina *Animus injuriandi* (que se podría traducir como la intención de injuriar o el deseo de ofender).

La injuria, la difamación o la calumnia son potencialmente un delito. No obstante, hay quien considera que deberían despenalizarse, pues van en contra de la libertad de expresión. Quienes desde la perspectiva jurídica sostienen que es razonable que la ley contemple el delito de injurias afirman que la libertad de expresión es un derecho `pero también lo es la protección al honor y el conflicto entre ambos derechos no debe suponer la despenalización del delito de injurias.

1.5.2. Tipicidad objetiva

1.5.2.1. Modalidad Típica

Como primera figura resalta la injuria, conforme se aprecia en la descripción típica recogida en el artículo 130°. El honor concebido desde una posición normativa-funcional, ha de verse lesionado cuando se profieren frases, palabras, gestos o vías de hechos que poseen aptitud suficiente como para perturbar de forma considerable la vida comunitaria del individuo, imposibilitando su participación en concretas actividades socio-económicas, culturales, menoscabando la dignidad humana; de manera que no cualquier conducta —en

apariencia formal—, puede ser reputada como típica, tiene relevancia jurídico-penal. Decimos esto, en cuanto la determinación del comportamiento típico, merecido y necesitado de pena, no puede ser cualquiera se requiere de un injusto cualificado, que realmente pueda lesionar al interés jurídico penalmente tutelado.

A prima face, no podemos delimitar la relevancia jurídico-penalmente de la conducta, conforme a un criterio fáctico, ora subjetivo, ora objetivo, en vista de su relativismo y su falta de correspondencia entre uno y otro.

Por otro, no podemos asumir una posición meramente legalista (positivista), de ser así habría que penalizar todas las expresiones injuriantes que de forma permanente se lanzan los ciudadanos unos a los otros; las cuales se hacen cada vez más intensas, en virtud de la intercambio de bienes y servicios, el tráfico rodado, el deporte, la política, donde la expresión de menosprecio es un patrón generalizador, sin que ello quepa admitir que una sociedad democrática, deba sumirse en el insulto y en la ofensa entre los individuos. No es esa nuestra idea, sino de introducir correctivos, en cuanto a la delimitación de la conducta típica, a efectos de reservar la pena para las injurias más lesivas, de conformidad con los principios de subsidiariedad y de ultima ratio, por lo que no se puede tornar como sostén una posición meramente fáctica, al dar como resolución respuestas diferenciadas ante idénticos supuestos de hecho. (Freyre, 2008) En palabras de Lorenzo Copello, solo aquellas que afectan de modo específico el derecho al respeto comunitario en el que se concrete el bien jurídico. (Copello, 2002)

Núñez escribe, la injuria, como deshonra o como descrédito, es siempre una conducta significativa de desmedro para las calidades estructurantes de la personalidad (Núñez, 1967). Para Fontan Balestra el elemento objetivo más característico de la injuria es su ofensividad, por lo que todo el proceso lógico de ella tiende a manifestar su existencia. (Balestra, 1969).

El comportamiento prohibido debe traducirse en una merma del prestigio social y de la autoestima, pero su lesividad dependerá de en realidad se afecte la posición social de la persona, en el marco de un proceso de integración entre los ciudadanos así como su estimación individual. Es así que el valor significativo de las acciones y omisiones, como modos de expresar la injuria, es totalmente relativo. De ahí que debamos valorar la conducta conforme a las características del caso concreto, las particularidades propias del sujeto pasivo, el entorno social en que se desenvuelve, etc. No será lo mismo que una persona que se dedica a cobrador de combis, sea insultado por no realizar bien el servicio público, que el catedrático que es llamado "cachudo" en pleno pasillo universitario. Se necesita, entonces, de una valoración que de forma concreta vaya a realizar el juzgador, a fin de calificar la punibilidad de la conducta, de conformidad con las propiedades de última ratio y de mínima intervención que habrá de caracterizar al Derecho penal en este ámbito de la criminalidad. La ofensa o el ultraje, son elementos normativos del tipo penal que serán llenados de contenido valorativo, que deberán colegirse con el contenido del bien jurídico tutelado y con las características esenciales del Derecho penal. (Freyre, 2008)

La conducta injuriosa se manifiesta a partir de palabras, éstas suponen proferir términos ofensivos, más concreto, insultos que afecten el decoro de la persona, su posición en la sociedad, (...) proferir una expresión o ejecutar un acción que impliquen juicios de valor que afecten la posición del sujeto y su desarrollo en la relación social. En palabras de Urquiza Olachea, bajo este tipo penal subyace una prescripción punitiva rigurosa, por la cual la ley no permite burlarse ni siquiera del más miserable de los hombres; es el derecho a ser respetado por los demás; a no ser escarnecido ni humillado ante uno mismo o ante otros. (Olachea, 2005)

Constituye una de las formas más comunes de injuria verbal, pero no la única, pues la escrita también es una vía muy usada, la expresión, pues, se manifiesta mediante palabras, sean estas emitidas verbalmente o por escrito, sea cual fuere el soporte o medio que sustente la expresión, y mediante formas expresivas gestuales o mímicas, así como una forma simbólica,

ya sea caricatura, emblemas. En todos los casos la conducta para estar revestida de relevancia jurídico – penal, en este caso la expresión o manifestación injuriosa, debe llegar al destinatario, esto es, al sujeto pasivo, de no ser así no se puede hablar de afectación subjetiva

También, parece la injuria implícita, cuando su materialidad no se percibe en las palabras que la manifiestan sino en el hecho de que estas suponen que el ofendido es capaz de realizar un acto que es el concepto social, es tenido por deshonesto o inmoral. Las injurias implícitas pueden presentar diversos aspectos.

Eusebio Gómez, nos recuerda la distinción entre injuria inmediata y mediata. Es inmediata la que, abiertamente, nos enrostra un vicio nuestro. Es mediata la que, exteriormente, objeta un vicio ajeno, pero que puede recaer, sobre nosotros, como un descrédito o un deshonor. (Gómez, 1997).

La injuria puede ejecutarse no sólo directa y personalmente, sino también valiéndose como instrumento de personas o seres irresponsables como niños, locos o animales. En el caso de los dos primeros, al poder ser considerados "instrumentos", no poseen capacidad de imputación criminal, su intervención será catalogada a título de autoría mediata, pues quien responde penalmente es el hombre de "atrás", es quien tiene el dominio real del hecho; en el último caso importa una autoría inmediata.

1.5.2.2. Sujeto Activo

Sujeto activo del delito de injuria, puede ser cualquier persona psico-física considerada, no se exige una determinada cualidad especial en el marco del tipo objetivo, basta que se trate de una persona con libertad de voluntad. Si quien emite la frase ofensiva es un menor de edad, ésta será un menor infractor de la ley penal, en el caso de adolescentes,

pero cuando es un niño, al no poseer capacidad de influenciar en la estimación social del colectivo, carece de toda relevancia jurídico-penal. Un caso de autoría mediata, es plenamente admisible, cuando el hombre de atrás obliga al hombre de adelante (ejecutor formal del delito) a proferir una frase injuriosa que atenta contra el honor de un tercero o, se aprovecha de un defecto psíquico-orgánico del instrumento. No hay posibilidad de admitir una coautoría, pues no es factible la división de roles, en cuanto a un codominio funcional del hecho; si dos sujetos ofenden de palabras a un solo sujeto pasivo, cada uno de ellos responderá a título de autor por su propio injusto.

1.5.2.3. Sujeto pasivo

Para ser considerado sujeto pasivo del delito de injuria, se requiere primero de una persona viva, es decir, la única posibilidad de que se menoscabe el prestigio social y la estimación individual, es que se trate de un individuo en plena participación en los procesos sociales, en el caso de la persona fallecida esto no se da, (...) el difunto, como tal ya no es para el Derecho una persona o un ente al que se les pueda reconocer atributos personales (Nuñez, 1967); por lo que a lo más puede lesionarse su memoria, pues no poseen derecho al honor. La afirmación propuesta se condice con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 138° del C.P, pudiendo, entonces, ser sujeto pasivo cualquier persona, sea cuales fuera su posición social, o estatus socio-económico de acuerdo a la naturaleza normativa que le hemos otorgado al bien jurídico tutelado.

¿Debe ser necesariamente un adulto? Al respecto, la doctrina no es unánime, para ello habrá que decir que si el delito de injuria supone una afectación en el prestigio social, en el caso de un niño por ejemplo, éste aún no habrá alcanzado un pleno desarrollo en sus relaciones sociales, pero en puridad de la verdad, la relevancia jurídico-penal de la conducta habrá que valorarse caso concreto, dependiendo de las circunstancias, pues puede que llamar bastardo a un niño por parte de un profesor, vaya que constituye una expresión ofensiva. El

niño, como apunta Núñez, tiene atributos personales, no sólo como tal, sino como futuro hombre o mujer. (Núñez, 1967)

El punto de mayor discusión en el plano doctrinal, es lo referente a las personas jurídicas, si se parte de que se requiere de un sujeto psico-físicamente considerado, habrá que negar rayanamente dicha opción, al tratar de una ficción legal creada por la Ley, para dotar a estas corporaciones (asociaciones), de un reconocimiento normativo, que les permita concretar sus fines más valiosos (pacto social). Empero, si bien la sociedad, al no detentar un cuerpo y espíritu, no cuenta con honor, si alcanza un prestigio, reputación y una credibilidad ante la sociedad, que puede verse afectado cuando se le atribuye falsear una marca o de introducir productos de muy baja calidad al mercado. El estado de la cuestión, amerita una profunda reflexión a fin de admitir o negar dicha capacidad (sujeto pasivo), de todos modos, no cabe duda, que cuanto se ofende directamente a los miembros del directorio de una empresa, mediando frases ofensivas e insultantes, será constitutivo del delito de injuria (Freyre, 2008)

1.5.3. La Veracidad de la Frase Injuriosa

El contenido de la expresión injuriosa puede ser falso o verdadero, en la lesividad no está supeditada a ello sino a la real afectación de la integración comunitaria del sujeto, dependiendo para ello las circunstancias y el lugar donde se profiere la frase, de todos modos su veracidad será tomado en cuenta para la declaración de atipicidad penal. La ofensa es un acto que menoscaba el honor y la reputación de una persona; es un menosprecio.

La verdad o certeza de la imputación no elimina la ilicitud de la conducta, no rige un concepto de falsedad objetiva. Lo dicho se corresponde plenamente con la redacción normativa del artículo 130 del C.P. tomando en cuenta también, que con respecto a las expresiones y frases injuriosas no procede la exceptio veritatis, sólo en el caso de los funcionarios y/o servidores públicos, sin que ello quepa entender que dicha institución glosa una causal de atipicidad penal.

Entonces, la relevancia jurídico-penal de la conducta injuriosa, ha de determinarse conforme a ciertos criterios, que han de valorarse conforme a las circunstancias del caso concreto y, la forma de que como se profiere la expresión injuriosa, al margen de su contenido veras; hablar en una reunión laboral sobre los defectos físicos de una persona que se pretende contratar, no será constitutivo de tipicidad penal, en cuanto es necesario valorar dicha aptitud para la idoneidad del cargo. Pero muy distinta es la situación apunta Soler, cuando tales apelativos se enderezan a la propia persona, de manera idónea y en tono adecuado para hierirla, deprimirla y hacerla sufrir por el recuerdo vivo de su inferioridad. (Soler, 1969)

1.5.4. Formas de Imperfecta Ejecución

Luego, ¿el delito de Injuria, es un injusto de mera actividad o en su defecto, es resultativo?. Se considera que se trata de un delito de lesión, pues no basta que se exprese la frase injuriosa, sino que ésta debe trascender en una real afectación del honor del sujeto pasivo; v. gr., si se mandó una carta de contenido injurioso que nunca pudo ser recibida por el destinatario, al haber sido extraviada, no se habrá producido la perfección delictiva.

Cabiendo relevar, que no es necesario que la frase injuriosa sea canalizada por el sujeto pasivo, pues resulta suficiente que sea conocida por terceros, atendiendo sus efectos consumativos, por ejemplo ante una publicación de difusión masiva, siempre y cuando se hayan puesto en circulación, al haber sostenido que la afectación ha de expresarse en una merma de la integración social del individuo, en algunos casos, su exclusión social.

No hay duda que entre los injustos de Injuria y Calumnia, existe una zona no muy clara de delimitación, en cuanto a los comportamientos que han de cobijarse en una u otra tipificación penal. Si alguien llama a otro, v. gr., ladrón o asesino, es preciso consultar el contexto para saber si le está imputando hechos delictivos, que pudieran ser constitutivos de calumnia, o si, por el contrario, está emitiendo una valoración sobre su persona que sería

constitutiva de injuria. En todo caso, si alguien llama delincuente a otra persona, cuando ésta última acaba de arrancarle su cartera, no cabe duda que sería un delito de calumnia, que según las circunstancias sería una Conducta atípica, pero si se imputa a una persona como «coimera" sin hacer alusión a hechos concretos que puedan dar lugar a un delito de Cohecho, será constitutivo de un delito de injuria; Podrían concurrir, siempre y cuando se profieran en simultáneamente dos frases que valoradas de forma independiente, puedan estar incursas en ambas tipificaciones penales. Como ha de resolverse, según el principio de subsidiariedad, pues el delito de Calumnia protege el honor de forma más intensa, en cuanto a la desvaloración de la acción y del resultado lesivo o de especialidad, puesto que la imputación del hechos es privativo de ambas figuras delictivas, donde el dato distintivo sería que el "hecho" se refiera a una conducta delictiva. (Cabrera, 2011)

1.5.5. Tipo Subjetivo del Injusto

En lo referente al tipo subjetivo del injusto, a efectos de establecer el delito de Injuria, es suficiente la acreditación del dolo, no hay cabida legalmente para el pretendido animus injuriandi.

El dolo se constituye con la conciencia de la entidad injuriosa de la imputación por lo que quien obra para atacar la honra o el crédito ajeno, sabiendo que con su acción ha de atacarlo o conociendo la posibilidad de esa ofensa, llena subjetivamente los requisitos de la injuria con dolo directo, indirecto o eventual, respectivamente. (Balestra, 1969)

En consecuencia, profiere Peña Cabrera, rechazamos los intentos doctrinarios de encontrar en estas infracciones la existencia de un especial "animus injuriandi", puesto que nuestra ley no contiene dentro de su estructura un supuesto que connote un elemento subjetivo del tipo. (Cabrera, 2011)

1.5.6.- Causas de Justificación

La problemática de la concurrencia de las causas de justificación, el ejercicio legítimo de un derecho (de información). Pero debe quedar claro, que en el caso de injurias recíprocas, fuera de la hipótesis contemplada en el artículo 133° del C.P. no cabe la compensación, no se acepta la retorsión, esto es, la impunidad de la conducta si se responde a una previa injuria con otra

En lo que respecta el consentimiento, dado el carácter altamente personalísimo del "honor", consideramos que su concurrencia, al no eliminar el carácter lesivo de la conducta, no puede ser reputada como una causa de atipicidad penal, sino comprendida en la antijuridicidad, al resultar prevalente la decisión de su titular en cuanto a su libre disponibilidad, afirmada con la naturaleza privada de su persecución penal.

Además, debe destacarse, que al margen de la causa de justificación por el ejercicio legítimo de un derecho, ha de revelarse otro precepto autoritativo, nos referimos a la realización de un cargo y/o oficio, por ejemplo, de forma específica, los jueces al momento de administrar justicia, en el marco de sus resoluciones así como los fiscales en la formalización de las denuncias o en sus acusaciones, pueden proferir frases injuriantes, es decir, lesivas al honor de una persona, pero en todo caso justificadas, pues son amparadas bajo un precepto permisivo.

Las conductas que se glosan en el artículo 133° del C.P. no hacen alusión a una causa de justificación, sino como lo dice su mismo nomen iuris, son causales de "atipicidad"

1.5.7. Errores relacionados a la calificación del hecho concreto

Se hace referencia a los errores más frecuentes, tales como errores metodológicos como no utilizar un protocolo adecuado, el uso de pruebas inadecuadas o irrelevantes para la evaluación preliminar de maltrato, utilización única de entrevistas, la realización de entrevistas en formato de interrogatorio con preguntas capciosas o sugestivas, el recabar más información de la necesaria, causando perjuicios a la persona evaluada.

Por otra parte, existen errores de diagnóstico, donde por ejemplo, es necesario considerar patologías existentes que se dan en el contexto del maltrato, el error de asumir que una víctima de maltrato tenga obligatoriamente que padecer secuelas al momento de la evaluación, la no valoración ni constatación de las posibles repercusiones psicosociales en la víctima, centrándose exclusivamente en las repercusiones clínicas, al evaluar al maltratador y no considerar que la ausencia de patología no implica ausencia de comportamiento violento, y al no considerar como prioridad la valoración de la víctima por sobre la evaluación del maltratador.

De esta misma manera, se consideran errores en la interpretación de los hechos valorados, por ejemplo, prejuicios que pueda tener el evaluador, o que éste atribuya patología al maltratador en función de la gravedad de la violencia, errores de incredulidad frente a una persona que dice la verdad, pero que está tensa en situación de evaluación, errores asociados a la idiosincrasia de la persona evaluada, ya sea por un estilo de personalidad en particular o por su estilo comunicacional, y el calificador puede evaluar negativamente estos factores en torno al caso, interpretándolo como que la persona no quiere cooperar o está mintiendo, interpretar erróneamente que la víctima niegue u omita aspectos relevantes de la situación producto de su propia tolerancia cultural.

Cuando existe una denuncia por “violencia familiar” (así lo sigue entendiendo el común de la población), en la que no existe violencia física, sino *daño psíquico*, la denuncia por lo general es recibida por el órgano policial correspondiente, se comunica al Juez de Familia, quien dispone que se le practique a la agraviada una pericia psicológica, luego cita a audiencia a las partes y dicta medidas de protección a favor de la parte agraviada, luego de lo cual remiten los actuados a las Fiscalías Penales.

1.6. MARCO NORMATIVO

1.6.1. Marco normativo internacional

El Estado peruano tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas, lo cual significa que además de reconocerlos, debe promoverlos y prever los mecanismos para su cabal ejercicio. La omisión o inacción respecto de alguno de estos componentes, así como la falta de una actuación con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia, en especial los casos de violencia contra las mujeres, coloca al Estado peruano en situación de incumplimiento pasible de acciones a nivel nacional e internacional.

El Estado peruano ha ratificado diversos instrumentos internacionales que contemplan importantes mecanismos de protección frente a la violencia. Así, tenemos los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que contienen un núcleo esencial de principios fundados en el respeto a la dignidad e igualdad de todo ser humano. De otro lado, el artículo 8 establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley”.

En el 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer manifestó su preocupación al Estado peruano porque "los actos de violencia física y psicológica sean particularmente difíciles de enjuiciar en el sistema judicial", alentando al Estado Parte a que suprima los impedimentos con que puedan enfrentarse las mujeres para acceder a la justicia.⁸

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró el Informe de Acceso a la Justicia para las Mujeres víctimas de violencia en América Latina en el 2007 y en el numeral 136, menciona que se ha constatado como uno de los vacíos e irregularidades en la investigación de los casos de violencia contra las mujeres en nuestra región es la deficiencia probatoria, ya que se limita a la prueba física y testimonial, en detrimento de otros tipos de prueba como la psicológica y científica. Por lo que concluye con que no obstante el reconocimiento, formal y jurídico, por parte de los Estados, de la violencia contra las mujeres como un desafío prioritario, existe una gran brecha entre la incidencia y la gravedad del problema y la calidad de la respuesta judicial ofrecida. Si bien la Comisión reconoce los esfuerzos de los Estados en la adopción de un marco jurídico y político para abordar la violencia contra las mujeres, aún persiste una enorme distancia entre la disponibilidad formal de ciertos recursos y su aplicabilidad efectiva. Esta situación no sólo propicia una sensación de inseguridad, indefensión y desconfianza en la administración de justicia por parte de las víctimas, sino que este contexto de impunidad perpetúa la violencia contra las mujeres como un hecho aceptado en las sociedades americanas en menoscabo de sus derechos humanos

Los artículos 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos contemplan el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. Asimismo, el artículo 7 señala que: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (...)". Por su parte, el artículo 2 inciso a) establece que "Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados pueda interponer un recurso efectivo".

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, establece una definición de discriminación que incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Esto “incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la libertad”. En el artículo 2-b, se establece que los Estados Parte “se comprometen a tomar diversas medidas, que incluyen la adopción de medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer”. En este sentido, se deben implementar “medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia (...)”.

En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos establece en el artículo 1º que “los Estados Parte se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (...)”. El artículo 5.1 señala que “toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y el artículo 25.1 que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales”.⁹

Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, establece en el artículo 1, que la violencia contra la mujer es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

⁹ Art 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.

El deber de los Estados de proveer recursos judiciales no se limita a ponerlos formalmente a disposición de las víctimas, sino que tales recursos deben ser idóneos para remediar las violaciones de derechos humanos denunciadas. En dicho marco, los Estados tienen el deber de cumplir con cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de las violaciones de los derechos humanos y evitar la impunidad.

En el 2007, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer manifestó su preocupación al Estado peruano porque “los actos de violencia física y psicológica sean particularmente difíciles de enjuiciar en el sistema judicial”, por ello, “el Comité alienta al Estado Parte a que suprima los impedimentos con que puedan enfrentarse las mujeres para acceder a la justicia”.

Por su parte, el Comité contra la Tortura en sus Observaciones Finales (2006), instó al Estado peruano a garantizar la pronta, imparcial y exhaustiva investigación de todas las alegaciones de actos de tortura (Juzgar e imponer penas adecuadas), así como cumplir con la obligación de proporcionar reparaciones adecuadas a las víctimas de tortura.

1.6.2. Marco Normativo Nacional

La Constitución Política del Perú consagra en su artículo 1° que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. En tal sentido, como un atributo indelible de la dignidad humana, la Norma Fundamental reconoce en el numeral 1 de su artículo 2° que toda persona tiene derecho: “*A su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar*”. En ese orden de ideas, la propia Constitución también ha prescrito en el literal h) del numeral 24 del citado artículo 2° que: “*Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes*”.

1.6.2.1. Ley 30364

Con relación a los derechos fundamentales a la integridad personal y a no ser víctima de ningún tipo de violencia, ni sometido a tortura o tratos humillantes, se ha promulgado la Ley N° 30364 ‘Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar’, que en su artículo 5° define la violencia contra las mujeres como: *“cualquier acción o conducta que les causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. Se entiende por violencia contra las mujeres: a. La que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico o psicológico y abuso sexual. b. La que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. c. La que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra”*. Asimismo, en su artículo 6° se define la violencia contra los integrantes del grupo familiar como *“cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.”*

Ahora bien, respecto a la especial consideración frente a la violencia que la Ley N° 30364 les otorga a las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad, dicha disposición tiene sustento constitucional en los artículos 4° y 7° de la Carta Magna y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, según la cual *“las personas en situación de postergación, debilidad o vulnerabilidad merecen una especial atención y cuidado por parte del Estado, sea porque pueden padecer abusos por parte de otras personas, y sus derechos puedan quedar amenazados o vulnerados por tener capacidades*

diferentes, o porque cuentan con menos oportunidades que los demás. A estos grupos se les considera 'sujetos merecedores de especial protección constitucional' y requieren una protección reforzada para poder ejercer plenamente sus derechos fundamentales."

Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, la Ley N° 30490 "Ley de la Persona Adulta Mayor" en su artículo 5° literal f) señala que es un derecho de las personas adultas mayores *"una vida sin ningún tipo de violencia"*; y, de igual modo, la Ley N° 29973 'Ley General de la Persona con Discapacidad', en su artículo 7° establece que *"La persona con discapacidad tiene derecho a la vida y al respeto de su integridad moral, física y mental en igualdad de condiciones que las demás. Su participación en investigaciones médicas o científicas requiere de su consentimiento libre e informado"*.

Conforme a lo hasta aquí señalado, el derecho a la integridad personal o integridad psicosomática no se expresa únicamente en el derecho a conservar la estructura orgánica del ser humano, sino que también persigue la preservación de la integridad psíquica de la persona que comprende toda habilidad motriz, emocional e intelectual, proscribiendo cualquier conducta que pueda afectarla o alterarla.

En tal contexto, la Ley N° 30364, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, precisa en su artículo 8, inciso b) que la violencia psicológica es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar daños psíquicos. Mientras que el daño psíquico, se entiende como la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo. Definiciones que sin duda, permitirán que el operador pueda aplicar con mayor eficacia una valoración de la pericia pertinente al caso en concreto.

En este estado resulta importante resaltar que en la Ley N° 26842, Ley General de Salud, se reconoce que los casos de violencia familiar son un problema de salud mental, además determina que su atención es responsabilidad primaria de la familia y del Estado. Así también la Ley N° 30314, Ley para Prevenir y Sancionar el Acoso Sexual en Espacios Públicos, establece que el Ministerio de Salud incorpora como parte de la atención de salud mental en los servicios médicos a nivel nacional, la atención de casos derivados por esta causa. Todas estas normas evidencian la necesidad de contar con un instrumento técnico oficial especializado que determine la valoración del daño psíquico de las personas adultas víctimas de violencia intencional.

De otro lado, al analizar la tutela jurídica en los casos de afectación de la salud mental, advertimos la necesidad de los últimos cambios legales en el aspecto penal, los que comprenden, entre otros, determinados criterios para sustentar y fijar la pena y sus agravantes. Así tenemos, que la parte agraviada y su entorno, no sólo resultan afectados con el delito en sí, sino que también se vulneran sus intereses, los de su familia y los de las personas que de ella dependan, afectándose sus derechos considerando especialmente su situación de vulnerabilidad. La condición de vulnerabilidad determina una mayor reprochabilidad en el presunto autor, justamente porque se aprovecha de esa situación, tal como se aprecia del tenor del inciso c) del artículo 45 del Código Penal, con lo cual se busca asegurar la protección jurídica y la reparación integral a favor de las víctimas.

Lo mismo ocurre con la incorporación de artículo 46-E del Código Penal referido a la circunstancia agravante cualificada por abuso de parentesco, donde la pena es aumentada hasta en un tercio por encima del máximo legal fijado para el delito cuando el agente se haya aprovechado de su calidad de ascendiente o descendiente, natural o adoptivo, padrastro o madrastra, cónyuge o conviviente de la víctima. Este estado de elevada indefensión es

reprimido con severidad, pues queda claro que siendo el agresor parte del entorno familiar de la víctima, la coloca en una situación de mayor riesgo para la comisión del delito.

Dentro de la política criminal, ha merecido especial atención del legislador, la agravación de las conductas cuando se trata del delito de lesiones graves en perjuicio de menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad (artículo 121- A), y en los supuestos de agravio contra la mujer y su entorno familiar (artículo 121-B). En ambos casos se contempla la posibilidad de la muerte de aquellos.

De otro lado, las lesiones consideradas de menor lesividad, también han sufrido una modificación en su redacción, pues se han derogado los artículos 122-A (Formas agravadas de lesiones leves cuando la víctima es menor de edad) y 122-B (Formas agravadas de lesiones leves por violencia familiar), las cuales han sido incorporadas en la nueva redacción del artículo 122 del Código Penal, como agravantes de este tipo penal. Es de resaltar, que la violencia en el medio familiar generalmente se dirige a aquellas personas más vulnerables del grupo: la violencia sobre la mujer, por su condición de tal; la violencia sobre menores de edad; la violencia sobre el adulto mayor; o la violencia sobre personas que sufren de discapacidad física o mental. Se reconoce pues, que estamos ante un delito que puede recaer en diversas víctimas, con un denominador común, su estado de vulnerabilidad.

Considerando que el daño psíquico es valorable según la presente Guía, resultaba acertada la incorporación del artículo 124-B del Código Penal, el cual señala que la determinación de la lesión psicológica se realizará mediante la valoración que precise el instrumento técnico oficial especializado, con la respectiva equivalencia regulada en la acotada norma.

Con relación a la violencia sexual, en sus diversas modalidades, estamos ante conductas que en esencia utilizan como medio la violencia, sea física o psicológica, incluso, para casos donde la ley no exige como elemento constitutivo del tipo penal, la violencia psíquica, pero la persona agraviada se siente violentada al momento del abuso sexual. También, encontramos el delito de tortura (artículo 321 del Código Penal), con presencia de sufrimientos graves, sean físicos o mentales, o cuando es sometida la persona a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o aflicción psíquica. El daño psíquico alcanza igualmente a las víctimas del delito de trata de personas (artículo 153 del Código Penal), las cuales están en una extrema situación de vulnerabilidad, pues son seres humanos que se exponen a la venta como mercancías, la prostitución y otras formas de explotación sexual, esclavitud, explotación laboral o mendicidad.

En el ámbito procesal penal, la pericia de valoración del daño psíquico se puede actuar como prueba anticipada durante la investigación preparatoria, de conformidad con el artículo 242 del Código Procesal Penal. En tal sentido, se contará con una herramienta útil que permitirá asegurar datos probatorios que en determinadas situaciones puedan perderse, especialmente tratándose de víctimas vulnerables.

Del mismo modo, es importante señalar que en el artículo 75 del Reglamento de la Ley N° 30364, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2016-MIMP, se establece que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, es el que fija los parámetros para la evaluación y calificación del daño físico y psíquico generado por la violencia perpetrada contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar; y, es el responsable de la actualización, difusión y capacitación de su personal, norma que es concordante con el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público, el cual establece la labor de las y los peritos, entre cuyas funciones se encuentra realizar peritajes, practicar investigaciones forenses y emitir dictámenes técnicos científicos de medicina legal y ciencias forenses en apoyo al sistema de justicia (artículo 87 inciso c).

Vale resaltar que en el artículo 86 del citado Reglamento, se le otorga a dicha entidad la rectoría de la medicina legal y ciencia forense en el Perú.

Finalmente, se justifica la actualización de la presente Guía, la cual constituye un instrumento técnico oficial especializado que orienta la labor pericial para la determinación de la lesión psicológica en nuestro país, tomando en cuenta los principios rectores y enfoques considerados en la normativa internacional y nacional vigente.

CAPÍTULO II

DISEÑO METODOLÓGICO

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1.1 Enunciado del Problema

La Ley 30364, reconoce en su artículo 5 la definición de violencia contra las mujeres de la Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Contra la Mujer, Convención “Belém do Pará”. Esto significa que reconoce que la violencia hacia las mujeres no se limita al ámbito doméstico –pues puede ocurrir también en el ámbito público- y, además, implica la comprensión de que este problema responde a desigualdades estructurales sociales hacia las mujeres, es decir, se da por razones de género.

La Ley 30364 modifica el artículo 122 e incorpora el artículo 124-b en el C. P Peruano, incluyendo a la lesión psicológica como delito. Esto debía ser de gran utilidad, pues los daños ocasionados por violencia psicológica hacia las mujeres o integrantes del grupo familiar no se encontraban contemplados en nuestro C. P, pese a poseer un desvalor de acción igual o mayor que las lesiones físicas en algunos casos. Sin embargo con las modificaciones realizadas por dicha ley, nos acarrea un problema producto de la mala praxis con respecto a la técnica legislativa aplicada por el legislador, por lo que este problema podría causar alguna confusión tanto para la persona agraviada del ilícito penal, como para los aplicadores del derecho, al momento de calificar un hecho donde se ven vulnerado el derecho al honor, toda vez que la Ley 30364, modifica un tipo penal genérico, donde no importa que condición tenga el sujeto activo con el sujeto pasivo.

2.1.2 Formulación del Problema

Este problema resulta de la modificación del artículo 122 del C. P por la ley 30364, la cual, en sus Disposiciones Complementarias, modifica dicho artículo no sólo se refiere a la lesión física (que tiene un parámetro de aplicación que va de los 10 a 30 días de descanso o atención facultativa), sino al daño psíquico moderado, que puede ser ocasionado por cualquier persona, en agravio de cualquier otra, no importando el grado de parentesco, vinculación o condición que tenga el agraviado. Y eso lo evidenciamos en el texto del mencionado Artículo 122 después de su modificatoria según la Ley 30364: *“El que causa a otro lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de diez y menos de treinta días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa, o nivel moderado de daño psíquico, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años. (...)”*.

Ahora nos centraremos cuando existe una denuncia por “violencia familiar” (así lo sigue entendiendo el común de la población), en la que no existe violencia física, sino daño psíquico, la denuncia por lo general es recibida por el órgano policial correspondiente, se comunica al Juez de Familia, quien dispone que se le practique a la agraviada una pericia psicológica, luego cita a audiencia a las partes y dicta medidas de protección a favor de la parte agraviada, luego de lo cual remiten los actuados a las Fiscalías Penales.

Sin embargo, la mayoría de las denuncias presentadas están referidas a insultos que puedan surgir, no solo dentro el seno familiar, sino también entre personas que no tienen vínculo alguno y ello trae consigo el problema de determinar, cuándo será considerado como daño psíquico; y cuando será considerado como un delito de injuria, el cual es un delito de acción privada.

Por lo que salta a la vista el siguiente problema, **¿Es necesario delimitar el delito de lesiones leves por daño psíquico moderado en relación con el delito de injuria?**

2.1.3. Justificación del Problema

El presente Proyecto de Tesis se justifica en la necesidad de rescatar la esencia de la Institución del delito de Lesiones Leves, esto es, su naturaleza jurídica, para que no exista una posible confusión para los operadores de derecho con los delitos contra el honor, correspondiente al delito de injuria. Ante esta situación, resulta relevante la presente investigación a fin de delimitar dichos tipos penales.

El presente Proyecto de Tesis, el beneficiario son los operadores de derecho, toda vez que podrían delimitar los tipos penales de lesiones leves por daño psicológico moderado y el delito de injuria.

El presente Proyecto de Tesis sí puede llevarse a cabo, pero con las siguientes limitaciones:

- Limitados recursos económicos.
- Dificultad para la obtención de material bibliográfico actualizado respecto a algunos puntos a tratar en el proyecto.

Para salvar la limitación de los recursos económicos, se cuenta con recursos propios; así mismo, para solucionar la falta de material bibliográfico se recurrirá a las bibliotecas de diferentes universidades y se empleará la tecnología como es el acceso a internet.

2.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

A continuación, expondremos el objetivo general y los objetivos específicos que contempla el presente proyecto de tesis:

2.2.1. Objetivo General:

Determinar si es necesario delimitar los delitos de lesiones por daño psíquico moderado con el delito de injuria.

2.2.2. Objetivos Específicos:

- Determinar si el verbo rector del daño psicológico como la “humillación”, “insultar” va referido al honor de una persona.
- Evidenciar los reales alcances del delito de lesiones leves por daño psíquico.

2.3. HIPÓTESIS GENERAL

Si es necesario delimitar el delito de lesiones leves por daño psíquico moderado en relación al delito de injuria, al momento de calificar un hecho donde se ha vulnerado el honor de una persona.

2.4. VARIABLES

V1: Si es necesario delimitar el delito de lesiones leves por daño psíquico moderado en relación al delito de injuria.

V2: Calificar un hecho donde se ha vulnerado el honor de una persona.

2.4.1. Conceptualización de las Variables:

V1: Si es necesario delimitar el delito de lesiones leves por daño psíquico moderado en relación al delito de injuria.

V1₁ Delito de Lesiones: Consecuencia de una acción u omisión impropia; causa, produce u origina un daño grave o leve en la integridad corporal o salud de la víctima.

V1₂ Daño Psíquico: La afectación y/o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo.

V1₃ Delito de Injuria: Acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

V2: Calificar un hecho donde se ha vulnerado el honor de una persona.

V2₁ Calificar un hecho: Determina que norma debe proceder a la aplicación del supuesto de hecho que tiene relevancia jurídica.

V2₂ Honor de una persona: Conjunto de los valores morales de una persona que determinan su forma de actuar.

2.4.2. Operacionalización de las Variables

2.4.2.1. Indicadores

V1.- Si es necesario delimitar el delito de lesiones leves por daño psíquico moderado en relación al delito de injuria.

VARIABLE	INDICADOR	FUENTES
V1₁: Delito de Lesiones	V1_{1i}¹ Consecuencia de una acción u omisión impropia V1_{1i}² Causa, produce u origina un daño grave o leve en la integridad corporal o salud de la víctima.	Doctrina Jurisprudencia
VARIABLE	INDICADOR	FUENTES
V1₂: Daño Psíquico	V1_{2i}¹ La afectación y/o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona. V1_{2i}² Producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia V1_{2i}³ que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o	Doctrina Jurisprudencia

	irreversible del funcionamiento integral previo	
VARIABLE	INDICADOR	FUENTES
V1₃: Delito de injuria	V1_{3i}¹ Acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona V1_{3i}² Menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación	Doctrina Jurisprudencia

V2.- Calificar un hecho donde se ha vulnerado el honor de una persona.

VARIABLE	INDICADOR	FUENTES
V2₁: Calificar un hecho	V2_{1i}¹ Determina que norma debe proceder a la aplicación del supuesto de hecho V2_{1i}² Relevancia jurídica	Doctrina Jurisprudencia
VARIABLE	INDICADOR	FUENTES
V2₂: Honor de una persona	V2_{2i}¹ Conjunto de los valores morales de una persona que determinan su forma de actuar	Doctrina Jurisprudencia

2.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

2.5.1. Tipo de Investigación

Por el tipo de investigación, el presente estudio reúne las condiciones necesarias para ser denominado como: “INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL - CORRELACIONAL”. Es Documental, porque estudia un problema con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza. El método correlacional consiste en la búsqueda de algún tipo de relación entre dos o más variables, y en que medida la variación de una de las variables afecta a la otra, sin llegar a conocer cuál de ellas puede ser causa o efecto. La información que se recoja sobre las variables involucradas en la relación comprobará o no esa relación, en cuando a su magnitud, dirección y naturaleza.

El presente proyecto de investigación tiene carácter, correlacional y documental, por lo cual el modelo teórico del presente proyecto se lleva a cabo con la búsqueda y recopilación de información relacionada al tema que se investiga para que sea incorporada a la investigación.

2.5.2. Modelo de la Investigación

En la presente investigación se utilizará el modelo teórico. Tiene la capacidad de representar las características y relaciones fundamentales del fenómeno, proporcionar explicaciones y sirve como guía para generar hipótesis teóricas. Por lo que el proyecto se lleva a cabo con la búsqueda y recopilación de información relacionada al tema que se investiga para que sea incorporada a la investigación.

2.5.3. Diseño de la Investigación

En la presente investigación se han considerado los diseños de investigación descriptivo y explicativo.

2.5.4. Métodos de la Investigación

Para el análisis y la presentación de datos y resultados, se utilizarán los siguientes métodos:

- **Método Analítico.** - Se utilizará a fin de realizar un análisis minucioso de la doctrina y legislación sobre el tema a investigar.
- **Método Inferencial.** Es el que permite realizar la inducción y la deducción en el proceso de análisis y síntesis de los hechos y fenómenos que se investigan.
- **Método Científico:** Este método nos proporciona la orientación adecuada para el trabajo de investigación, así como para regular la actividad intelectual en el del problema científico, la contrastación de hipótesis, etc, y obtener nuevos conocimientos.
- **Método Hermenéutico Jurídico.** - Nos permitiría interpretar y analizar la normatividad nacional e internacional sobre el tema propuesto.
- **Método Comparativo.** - Nos permitiría hacer una comparación o contrastación de las normas de derecho comparado sobre el tema, observando las formas como han sido incorporados a los sistemas jurídicos de cada País en los que se encuentran legislados.

- **Método Sistemático.** - Está orientado a establecer un significado de una norma legal a interpretar, partiendo de un análisis integral con otras normas que tengan relación dentro del mismo cuerpo legal o textos legales supletorios.

2.5.5. Técnicas de la Investigación

- **Fichaje:** A través de él se compilará el material bibliográfico relacionado al tema el cual nos permitirá ubicarnos en el tema jurídico. Se elaborarán resúmenes, fichas que contengan las nuevas ideas y/o cambios acerca de la investigación, hojas de registro y cuaderno de entrevistas.
- **Recolección y Análisis de datos:** De esta manera se analizará de manera detallada la previamente recopilada del tema que se investiga, pudiendo ser información de carácter doctrinal, jurisprudencial o legislativo

2.5.6. Fuentes de Investigación

Las fuentes utilizadas en la presente investigación son las fuentes secundarias:

- Libros.
- Revistas jurídicas.
- Tesis
- Artículos de opinión

CAPÍTULO III

PROBANZA DE LA HIPÓTESIS

3.1. ANÁLISIS Y CONTRASTE DE LA HIPÓTESIS Y LOS OBJETIVOS

a) Determinar si es necesario delimitar los delitos de lesiones por daño psíquico moderado con el delito de injuria.

En principio, debemos despejar confusiones sobre conceptos cercanos, siendo que para Echeburúa, el daño psicológico se refiere a dos aspectos, por un lado a las lesiones psíquicas agudas producidas por un delito violento, que, en algunos casos, pueden remitir con el paso del tiempo, el apoyo social o un tratamiento psicológico adecuado; y, por otro, a las secuelas emocionales que persisten en la persona de forma crónica, como consecuencia del suceso sufrido y que interfieren negativamente en su vida cotidiana. En uno y otro caso el daño psíquico es la consecuencia de un suceso negativo que desborda la capacidad de afrontamiento y de adaptación de la víctima a la nueva situación. (Echeburúa 2004)

El propio Echeburúa clasifica, dos tipos básicos de daño psicológico:

a) Daño agudo o lesiones psíquicas, que se caracterizarían por la posibilidad de que puedan remitir con el paso del tiempo, el apoyo social o un tratamiento terapéutico adecuado. Las lesiones psíquicas más frecuentes son los trastornos adaptativos (caracterizados por un estado de ánimo depresivo o ansioso), el trastorno por estrés agudo o el trastorno por estrés postraumático.

b) Daño crónico o secuelas psíquicas, que se caracterizarían por la estabilidad del daño, persistiendo en la persona de forma crónica, a modo de cicatrices psicológicas, no remitiendo con el paso del tiempo ni con un tratamiento adecuado. Las secuelas

psíquicas más frecuentes son las modificaciones permanentes de la personalidad (Echeburúa, 2004, citado en Morillas, Patró y Aguilar, 2011. p. 394).

También se entiende que el daño psíquico leve, moderado o grave para nuestra legislación peruana es un sistema de medición de la lesión psicológica. En ese sentido entendemos que del hecho violento, en este caso violencia psicológica nos puede acarrear dos posibles consecuencias; el primero es la alteración o daño psicológico y segundo el daño psíquico propiamente dicho.

Para Roberto Reynaldi Román, la configuración de un delito de lesión psicológica, se debe determinar que el nivel de daño psíquico verificado, proviene de las siguientes causas:

1. Una conducta idónea proveniente del agente, diferenciable y verificable, que sea capaz de explicar suficientemente el resultado. Esto es, que la lesión le pertenezca al autor, como su obra.
2. Una concurrencia de comportamientos, en los que se pueda identificar la conducta del autor, también de forma verificable y diferenciable, como factor preponderante, que sea capaz de explicar el resultado.
3. Un comportamiento del autor, que haya incrementado un riesgo percibido por el autor, para provocar la lesión, de tal forma que el resultado final, le sea imputable al agente como obra suya. (Reynaldi 2017)

En ese sentido del artículo 8 de la Ley 30364, “Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar”, en su texto primigenio señala que la violencia psicológica es la acción o conducta, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla y que puede ocasionar

daños psíquicos; este artículo fue modificado por el Decreto Legislativo N° 1323 “Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género” el cual señala sobre la violencia psicológica que es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. De lo que se puede apreciar es que agrega los verbos rectores como avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla.

Ahora debemos entender que verbos rectores como “humillar” e “insultar” están referidos a la afectación del honor de una persona, por lo que tenerlos en cuenta para que se produzcan una afectación psicológica y por consiguiente un daño psíquico, podría causar una interpretación que llegara a tener como conclusión de que tanto el delito de lesiones leves por daños psíquico moderado, y el delito de injuria prevén en su marco de protección el honor de la persona.

Se aprecia de la técnica legislativa empleada por el legislador ha sido incorrecta, ante esa errónea técnica, opinamos que es necesario delimitar estos dos tipos penales, para evitar consecuencias como la sobrecarga procesal, que existen en los juzgados, fiscalías y sobre todo la gran cantidad de pericias psíquicas que se deberían obtener para combatir esta posible sobrepoblación de casos sobre daño psíquico entre particulares.

La solución parte entonces, por recrear nuestras lecciones sobre dogmática penal, para delimitar las conductas delictivas de forma adecuada, en este tipo de delitos. Podemos partir de criterios de imputación que gozan de aceptación general, para identificar y discriminar las conductas típicas del delito de lesión psicológica, de otra figura como el delito contra el honor.

Como primer criterio de imputación, tenemos la verificación de una conducta idónea para crear un riesgo no permitido para la salud mental. El segundo criterio, consiste en la realización de esa conducta en el resultado: lesión psicológica. Finalmente, como tercer criterio, que el resultado se encuentre dentro del radio de acción del tipo o dentro del ámbito de protección de la norma.

Partiendo de tales filtros de imputación, podemos realizar juicios de subsunción positivos, que obedecen a un orden analítico de la teoría jurídica del delito. Ello otorga cierta legitimidad a la aplicación del derecho penal, por los operadores jurídicos. Y sentaría un alto, a la posible confusión al momento de calificar un hecho típico.

b) Determinar si los verbos rectores del daño psicológico como “humillar”, “insultar” va referido al honor de una persona.

Como ya se señaló partimos de acto violento generador de daño psicológico, y este hecho es definido como que es la acción u omisión, tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla, sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación; y como la Ley 30364, no especifica conceptos sobre que debemos entender sobre “humillar” y “insultar”, recurrimos conceptos válidos proporcionados por la Real Academia Española.

La Real Academia nos presenta el concepto de humillar como *“herir el amor propio o la dignidad de alguien”*; y respecto al concepto de insultar como el acto de *“ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones”*. Ahora de los conceptos proporcionados por la Real Academia, tomamos las apreciaciones como *“herir la dignidad”*, *“herir el amor propio”*, *“ofender a alguien”*, con el fin de poder compararlos con el concepto brindado por la doctrina sobre “honor”.

Entendemos que el honor está vinculado a la dignidad humana, es un derecho personalísimo, es decir el honor como cualidad propia de la persona humana, emanada de su dignidad y grandeza. Por otro lado el honor subjetivo está referido a la propia valoración y dignidad. Se trata de la imagen de sí mismo que tiene cada individuo y que se forma con independencia del resto de los componentes del grupo social. En sentido la acción de “*herir la dignidad*”, “*ofender a alguien*” y por último el de “*herir el amor propio*” atentan contra el honor de un ser humano y como consecuencia con la actual redacción legal del hecho generador de daño psicológico, entendemos que este nuevo tipo penal regulado en el artículo 122 del C.P, tiene como bien jurídico protegido el honor de una persona.

c) Evidenciar los reales alcances del delito de lesiones leves por daño psíquico.

En este objetivo nos apartamos de la redacción legal peruana, y nos centraremos en lo que señala la doctrina, para lograr un mejor entendimiento de lo protegido por este tipo penal. Para Fernández Sessarego, el daño moral, es el dolor o sufrimiento, enmarcado en el plano subjetivo, íntimo de la persona; es decir, que el evento dañino incide sobre la unidad psicosomática, más precisamente sobre la esfera afectiva de la persona. Se diferencia del “daño al proyecto de vida”, en que este último atenta contra la libertad de la persona para fijar sus metas y renovar sus proyectos, lo que afecta el sentido mismo de la existencia. Es decir, que ambas modalidades de “daño a la persona” se distinguen por sus consecuencias. Así, mientras el “daño moral” hiere los sentimientos y los afectos de la persona, por hondos que puedan ser, éstos no suelen acompañar al sujeto durante su transcurrir vital. El daño moral puede traer consigo daño psíquico. (Sessarego, 2003).

El daño psíquico es la afectación y/o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia,

que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo”¹⁰

La lesión psíquica se refiere a una alteración clínica aguda que sufre una persona como consecuencia de haber sufrido un delito violento, y que le incapacita significativamente para hacer frente a los requerimientos de la vida ordinaria a nivel personal, laboral, familiar o social. Este concepto de lesión psíquica, que es medible por medio de los instrumentos de evaluación adecuados, ha sustituido al de daño moral, que es un concepto más impreciso, subjetivo y que implica una percepción personal más de perjuicio a los bienes inmateriales del honor o de la libertad que de sufrimiento psíquico propiamente dicho. Las lesiones psíquicas más frecuentes son los trastornos adaptativos (con estado de ánimo deprimido o ansioso), el trastorno de estrés postraumático o la descompensación de una personalidad anómala. Más en concreto, a un nivel cognitivo, la víctima puede sentirse confusa y tener dificultades para tomar decisiones, con una percepción profunda de indefensión (de estar a merced de todo tipo de peligros) y de incontabilidad (de carecer de control sobre su propia vida y su futuro); a nivel psicofisiológico, puede experimentar sobresaltos continuos; y, por último, a nivel conductual, puede mostrarse apática y con dificultades para retomar la vida cotidiana.

Señalamos líneas arriba, criterios de imputación, para una acorde interpretación del tipo penal de lesiones por daño psíquico; en esas líneas hablamos del riesgo permitido, donde señalamos que no pueden reprimirse o prohibirse toda conducta que pueda causar daño, pues la misma interacción social se paralizaría. Luego, los insultos, humillaciones, frases denigrantes que afectan la autoestima, tendrán cabida en los delitos contra el honor, de ser el caso. Pues no resultan actos con idoneidad suficiente para causar una lesión.

Las acciones de afectación psicológica típicas, pueden verificarse en ámbitos de agresión, cuando el autor dirige su conducta a causar daño psíquico en la víctima, generando

¹⁰ Comité de Trabajo IML/CAPS/ MMR/PUCP 2008.

un trastorno mental no momentáneo. Ello es importante, pues el sobresalto o susto, a raíz de un suceso de agresión no configura de forma independiente un delito de lesión. El agente debe haber causado un trastorno, con intención de alterar la psique de la víctima, manifestándose en sintomatologías diferenciables en niveles y grados de ansiedad y depresión, que revelen problemas de ira, hostilidad, agresividad, adaptación psicosocial o estrés, o traumas en el aprendizaje o desarrollo en la interacción social.

La pregunta será entonces: ¿Es posible causar una afectación psicológica de tipo cognitivo o conductual, o algún nivel de daño psíquico moderado, grave o muy grave, a partir de una humillación, insultos, trato denigrante o menosprecio? Este cuestionamiento, nos permite intentar diferenciar cuáles son las conductas idóneas para la configuración de un delito de lesión psicológica, ello a fin de dotar de razonabilidad al ius puniendi, a partir de criterios dogmáticos de imputación.

Benyakar (2003) sostiene que no se puede afirmar a priori que una persona ha sufrido un “trauma” basándose sólo en la intensidad, duración y exposición del hecho violento. Se debe tener en cuenta la manera singular de la vivencia en que las personas elaboran psicológicamente el impacto de la violencia, el entorno sociocultural en el que éste se produce y es significado, así como las características específicas del evento fáctico ocurrido. El mismo autor diferencia tres aspectos en la situación de violencia causante de daño psíquico: a) el evento fáctico, b) la vivencia y c) la experiencia.

a) El evento fáctico se refiere al hecho concreto que tiene la capacidad potencial de irrumpir en la vida de las personas y de provocar una discontinuidad o “disrupción” alterando un estado de equilibrio precedente al hecho. La capacidad desestructurante del evento fáctico se potencia cuando es inesperado, interrumpe procesos vitales,

amenaza la integridad física y psicológica, mina el sentimiento de confianza, contiene rasgos novedosos no codificados y distorsiona el hábitat cotidiano.

b) La vivencia se refiere al modo singular en que un sujeto procesa el evento fáctico violento en su mundo intrapsíquico. Ante un hecho exógeno se moviliza en el psiquismo la capacidad de articular los afectos con los procesos de pensamiento. La vivencia traumática ocurre cuando el evento fáctico tiene el poder de fracturar los procesos de articulación entre afectos y pensamientos lo que produce fallas en la elaboración psíquica.

c) La experiencia se refiere a la articulación psicológica entre el evento fáctico y la vivencia. Mientras que la vivencia es el modo intrapsíquico que cada persona tiene para sentir y metabolizar los hechos de violencia, procesos donde varios de ellos no son conscientes, la experiencia es necesariamente pensable y comunicable. Las personas hablan de sus experiencias, describen los hechos y expresan la percepción que tienen de los efectos del evento en ellos. Es una narrativa personal de lo ocurrido que guarda relación con la vivencia pero que no la puede abarcar ni expresar del todo.

El punto de partida consiste en identificar la creación de un riesgo relevante para la salud mental, generado por un comportamiento idóneo del autor para alcanzar el resultado: daño psíquico o afectación psicológica. Cuando hablamos del riesgo permitido, señalamos que no puede reprimirse o prohibirse toda conducta que pueda causar daño, ya que afirmar ello, implicaría la paralización de la misma interacción social.

El operador jurídico (Juez o Fiscal) tiende a aceptar cualquier comportamiento hostil, dejando en las manos del perito psicólogo (con intención o sin ella) el juicio de adecuación, tarea que por cierto, no le corresponde a éste último. Al parecer, para el Fiscal ya no resulta importante, un previo análisis de tipicidad del hecho denunciado. Ello conduce a una inaceptable saturación del subsistema de evaluaciones psicológicas, del servicio médico legal, en el que se ordena examinar a todas las personas, que habrían sufrido alguna clase de afrenta u ofensa. Es necesario recordar entonces, ciertos parámetros de atribución, a fin de identificar las conductas penalmente relevantes.

CONCLUSIONES

Luego de la realización del presente trabajo en el cual se buscaba dar respuesta a la problemática planteada y dar cumplimiento a los objetivos trazados en la parte metodológica de la investigación, es que hemos llegado a las siguientes conclusiones:

Primera: De la lectura del artículo 8 de la Ley 30364, se entiende que las consecuencias de los actos de violencia psicológica, podrían causar dos tipos de daño, el primero en menor escala como la afectación o daño psicológico, y otro en mayor escala como el daño psíquico, por ende los supuestos generadores de violencia psicológica (verbos rectores) como humillar, insultar, avergonzar en otros, podrían causar un daño psíquico moderado como lo regula el art 122 del C.P.

Segunda: No pueden reprimirse o prohibirse toda conducta que pueda causar daño, pues la misma interacción social se paralizaría, en ese sentido los insultos, humillaciones, frases denigrantes que afectan la autoestima, tendrán cabida a nuestro parecer en los delitos contra el honor y estos son protegidos ya por el C.P en su artículo 130 al 138. Pues no resultan estos actos con idoneidad suficiente para causar una lesión. Lo que difiere de las acciones de afectación psicológica típicas, las cuales pueden verificarse en ámbitos de agresión, cuando el autor dirige su conducta a causar daño psíquico en la víctima, generando un trastorno mental no momentáneo. En ese sentido el agente debe haber causado un trastorno, con intención de alterar la psique de la víctima, manifestándose en sintomatologías diferenciables en niveles y grados de ansiedad y depresión, que revelen problemas de ira, hostilidad, agresividad, adaptación psicosocial o estrés, o traumas en el aprendizaje o desarrollo en la interacción social.

Tercera: Para calificar un hecho violento, el cual es reprochable socialmente, se necesita el estudio mental del sujeto pasivo, el cual implica ubicarse en un antes, durante y después de la agresión, esto es, que a un nivel retrospectivo, debe llegarse a conocer a la víctima en un tiempo anterior a la agresión. Luego, identificar la acción agresora y con ello, la respuesta probable del sujeto pasivo. Finalmente, establecer en tiempo presente, cual ha sido la consecuencia, expresada en datos de variación negativa en la psicología de la persona, a quien se le ha causado el trastorno.

Cuarta: La conducta idónea para la creación de un riesgo relevante pasible de una sanción penal, es la acción dirigida a causar un daño psicológico o trastorno mental no momentáneo al sujeto pasivo, de tal forma que el autor tenga conocimiento o se represente que con su comportamiento va a incapacitar a la víctima en su ámbito psíquico.

Quinta: Los estudios científicos aportan al derecho penal y concluyen que ante un hecho violento la primera etapa de afectación mental es el daño psicológico, como segunda etapa es el daño psíquico.

RECOMENDACIONES

Primera: Se recomienda que a los verbos rectores que se muestran en la Ley 30364, respecto a la violencia psicológica, debería agregárseles el requisito de habitualidad; esto parte del análisis en la presente investigación, en que se concluye que no se pueden considerar, a los insultos y humillaciones, lesiones que causen daños psíquicos, pero si le agregamos el requisito de que estos sucesos sean habituales este sería el elemento clave para la configuración del delito de daño psíquico, en los supuestos establecido en la mencionada ley. Debe tenerse en cuenta que la habitualidad requerida en el tipo constituye un dato fáctico caracterizado por el clima de violencia permanente y constante en el que el agresor mantiene a la víctima, y que deberá causarle daños no momentáneos a su psiquis, asimismo se debe tener en cuenta que esta habitualidad es un elemento fáctico y por lo tanto es necesario ser probado.

Segunda: Se recomienda que el objetivo prioritario de todos los operadores que trabajan en este ámbito penal debería ser la promoción de los medios de investigación y de prueba que permitan detectar la violencia habitual y que realmente esté relacionada a hechos de violencia fuera y dentro del ámbito familiar y que sean propios del hombre o de la mujer para mantener bajo ese poder o coerción a la víctima, en ese sentido el gobierno debe priorizar la contratación de peritos psicológicos y psiquiátricos debidamente acreditados.

Tercero: Se recomienda que debe tenerse en cuenta criterios de imputación al momento de calificar estos hechos violentos, siendo que es propuesta nuestra tomar criterios de imputación aquellos que son generalmente reconocidos en el Derecho Penal, en se sentido tendríamos como primer criterio de imputación, la verificación de una conducta idónea para crear un riesgo no permitido para la salud mental. El segundo criterio, consiste en la realización de esa

conducta en el resultado: lesión psicológica. Finalmente, como tercer criterio, que el resultado se encuentre dentro del radio de acción del tipo o dentro del ámbito de protección de la norma.

ANEXO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES							
AÑO	2017						
ACTIVIDADES	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
ETAPA DE ANÁLISIS – METODOLÓGICA							
Análisis Previo	X	X					
Planteamiento del Problema	X	X					
Recopilación y ordenamiento de datos	X	X					
Clasificación de datos		X					
Análisis Crítico e Interpretativo		X					
ETAPA ELABORATIVA							
Análisis metódico		X	X	X	X	X	
Redacción Inicial			X				
Interpretación de la Información			X	X	X	X	
Segunda Redacción						X	
Preparación bibliográfica, citas, anexos y cuadros estadísticos						X	
Corrección e Impresión de la Tesis							X
Sustentación							X

PRESUPUESTO

INVERSIÓN A LA INVESTIGACIÓN	S/. 4,782.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS

GASTOS PRESUPUESTADOS

BIENES	PRECIO UNITARIO S/.	COSTO TOTAL S/.
200 hojas de papel A4	0.10	20.00
01 cuaderno	5.00	7.00
02 lapiceros	2.00	4.00
01 lápiz	1.00	1.00
SERVICIOS		
Movilidad		300.00
Fotocopias		200.00
Impresiones		100.00
Adquisición de textos		200.00
Internet		50.00
Asesoría		3.900
TOTAL		4.782

ANEXOS (MATRIZ DE CONSISTENCIA)

“ANÁLISIS DEL DELITO DE LESIONES LEVES POR DAÑO PSÍQUICO MODERADO EN RELACIÓN CON EL DELITO DE INJURIA”						
FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBEJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES	INDICADORES	FUENTES
¿Es necesario delimitar el delito de lesiones leves por daño psíquico moderado en relación con el delito de injuria?	<p>OBJETIVO GENERAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> Determinar si es necesario delimitar los delitos de lesiones por daño psíquico moderado con el delito de injuria. <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Determinar si el verbo rector del daño psicológico como la “humillación”, “insultar” va referido al honor de una persona. Evidenciar los reales alcances del delito de lesiones leves por daño psíquico. 	Si es necesario delimitar el delito de lesiones leves por daño psíquico moderado en relación al delito de injuria, al momento de calificar un hecho donde se ha vulnerado el honor de una persona.	<p>V1 Si es necesario delimitar el delito de lesiones leves por daño psíquico moderado en relación al delito de injuria.</p> <p>V2 Calificar un hecho donde se ha vulnerado el honor de una persona.</p>	<p>V1₁ Delito de Lesiones: Consecuencia de una acción u omisión impropia; causa, produce u origina un daño grave o leve en la integridad corporal o salud de la víctima.</p> <p>V1₂ Daño Psíquico: La afectación y/o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo.</p> <p>V2₁ Delito de Injuria: Acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia</p>	<ul style="list-style-type: none"> V1_{1i}¹ Consecuencia de una acción u omisión impropia V1_{1i}² Causa, produce u origina un daño grave o leve en la integridad corporal o salud de la víctima. V1_{2i}¹.- La afectación y/o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona. V1_{2i}².- Producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia V1_{2i}³.- que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo V2_{1i}¹ Acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona V2_{1i}² Menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación V3_{1i}¹ Determina que norma debe proceder a la aplicación del supuesto de hecho V3_{1i}² Relevancia jurídica V3_{2i}¹ Conjunto de los valores morales de una persona que 	<ul style="list-style-type: none"> Código Penal Jurisprudencia Doctrina

				<p>estimación.</p> <p>V3₁ Calificar un hecho: Determina que norma debe proceder a la aplicación del supuesto de hecho que tiene relevancia jurídica.</p> <p>V3₂ Honor de una persona: Conjunto de los valores morales de una persona que determinan su forma de actuar.</p>	determinan su forma de actuar	
--	--	--	--	---	-------------------------------	--

BIBLIOGRAFÍA

- ✓ Acosta, M. L. (2016). Violencia contra las mujeres y trato indigno. Entre la invisibilidad y la negación. España: Centro de Estudios sobre la Mujer.
- ✓ Balestra, C. F. (1969). Tratado de Derecho Penal, Parte especial. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- ✓ Benyakar, M. y Lezica, A. (2005). Lo traumático. Clínica y paradoja. El proceso traumático. Tomo 1. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- ✓ Cabrera, A. P. (2011). Derecho Parte Especial. Lima: Idemsa.
- ✓ Copello, L. L. (2002). Los Delitos Contra el Honor. Valencia: Tirant lo blanch.
- ✓ Echeburúa, E. y Guerricaechevarría, C. (2004). Abuso sexual en la infancia: víctimas y agresores. Barcelona: Editorial Ariel, S.A.
- ✓ Fernández Sessarego, C. (2003). Deslinde conceptual entre “daño a la persona”, “daño al proyecto de vida” y “daño moral”. Foro Jurídico, Año 1, 2 (2007).
- ✓ Fernández, C. (2002). La Persona Humana. Lima: Ius et Veritas
- ✓ Fischer, H. (1928). Los Daños Civiles y su reparación. Madrid: Trotta.
- ✓ Freyre, A. R. (2008). Derecho Penal Parte Especial. Lima: Idemsa.
- ✓ Galain, P. (2010). La reparación del daño a la víctima del delito. Valencia.
- ✓ Gómez, R. M. (1997). El Delito de Injuria. Barcelona: Cedecs Editorial S.L.
- ✓ Guzmán, C. R. (2016). Judicialización de la violencia familiar psicológica: valoración del daño psíquico en Perú. Buenos Aires.
- ✓ Navarro Góngora, J. N. (2014). Manual de Peritaje sobre malos tratos psicológicos, Junta de Castilla y León.

- ✓ Nuñez, R. (1967). Derecho Penal Argentino, parte especial. Buenos Aires: Bibliográfica Argentina.
- ✓ Olaechea, J. U. (2005). Jurisprudencia Penal. Lima: Jurista Editores.
- ✓ Salgado, C. (1981). Los delitos de abusos deshonestos. Barcelona.
- ✓ Soler, S. (1969). Derecho Penal Argentino. Buenos Aires.
- ✓ T.S. Vives Anton, O. B. (2004). Derecho Penal. Parte Especial. Valencia: Tirant lo blanch.
- ✓ Zannoni, E. (1987). El daño en la responsabilidad civil. Buenos Aires: Astrea.

LINKOGRAFÍA

- ✓ Jiménez, L (2017), Check list para identificar distorsiones cognitivas en víctimas de violencia conyugal, recuperado de <http://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/14422/4/TRABAJO%20DE%20GRADO.pdf>
- ✓ Muñoz, J. M. (s.f.). Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Recuperado el 20 de Agosto de 2017, de <http://www.copmadrid.org/webcopm/publicaciones/juridica/jr2013v23a10.pdf>
- ✓ Pérez, L. F. (2008). La prueba pericial psicológica en asuntos de violencia de género, recuperado de: https://www.uv.es/ajv/art_jcos/art_jcos/num21/21proper.pdf
- ✓ Ramos, S., La graduación del daño mental beneficioso para sancionar a los responsables, recuperado de: <http://www.usmp.edu.pe/derecho/cefame/materiales/lesion%20salud%20m.pdf>
- ✓ Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23.aed.). Consultado en <http://www.rae.es/rae.html>

- ✓ Reynaldi Roman R. (2017) Lesión Psicológica, imputación daño psíquico, afectación psicológica y parámetros diferenciales, Recuperado de <http://legis.pe/lesion-psicologica-imputacion-dano-psiquico-afectacion-psicologica-parametros-diferenciales/>
- ✓ Salinas, G. M. (2016). La Desnaturalización del Derecho Penal a raíz de la Ley 30364 (Lesiones Leves), recuperado de: http://www.scientiarvm.org/cache/archivos/PDF_962358417.pdf
- ✓ Ureta, L. A. (2016). El Peruano. Recuperado el 15 de Setiembre de 2017, de <http://busquedas.elperuano.com.pe/normaslegales/anexo-de-la-res-n-3963-2016-mp-fn-que-aprobo-guias-elabora-anexo-res-n-3963-2016-mp-fn-1444631-1/>
- ✓ Velásquez, H. M. (2016). Universidad Católica San Pablo. Recuperado el 4 de Octubre de 2017, de <http://ucsp.edu.pe/investigacion/derecho/wp-content/uploads/2016/06/An%C3%A1lisis-de-la-cuantificaci%C3%B3n-del-delito-de-lesiones-en-el-marco-de-la-violencia-contr-la-mujer-en-el-ordenamiento-jur%C3%ADdico-peruano-.pdf>
- ✓ Velásquez, .H M, Análisis de la cuantificación del delito de lesiones en el marco de la violencia contra la mujer en el ordenamiento jurídico peruano. recuperado de: <http://ucsp.edu.pe/investigacion/derecho/wp-content/uploads/2016/06/An%C3%A1lisis-de-la-cuantificaci%C3%B3n-del-delito-de-lesiones-en-el-marco-de-la-violencia-contr-la-mujer-en-el-ordenamiento-jur%C3%ADdico-peruano-.pdf>